

Julio 18 de 1940

17ª REUNION — 13ª SESION ORDINARIA

Presidencia del doctor **ROBUSTIANO PATRON COSTAS**,
Presidente provisional del Senado
y del doctor **HECTOR GONZALEZ IRAMAIN**,
Presidente de la Comisión de Obras Públicas

Senadores presentes: Alberto Arancibia Rodríguez, Herminio Arrieta, Ricardo Caballero, Juan Cepeda, Alberto Francisco Figueroa, Francisco R. Galíndez, Manuel García Fernández, Héctor González Iramain, Laureano Landaburu, Eduardo Laurencena, Lucio López Peña, José Heriberto Martínez, Alfredo L. Palacios, Robustiano Patrón Costas, Jorge J. Pinto, Guillermo Rothe, Matías G. Sánchez Sorondo, Antonio Santamarina, Carlos Serrey, Gilberto Suárez Lago, José P. Tamborini.

Senador ausente, con licencia: Atanasio Eguiguren.

Senadores ausentes, con aviso: Juan José Lubary, Juan R. Vidal, Benjamín Villafañe.

Senadores ausentes: Mario Arenas, Aldo Cantoni, Juan B. Castro, Raúl Ceballos Reyes.

SUMARIO

1.—Asuntos entrados:

I.—Mensaje del Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar presidente de la Caja Nacional de Jubilaciones, Pensiones y Subsidios de Empleados y Obreros de Empresas Particulares.

II.—Despachos de comisión.

III.—Peticiones.

2.—Proyecto de ley del senador Sánchez Sorondo, elevando al rango de embajada la categoría de la representación diplomática ante el gobierno del Japón.

3.—Proyecto de ley del senador González Iramain, declarando de utilidad pública varias fracciones de terreno en San Carlos de Bariloche, y creando el parque General San Martín.

4.—Proyecto de ley de los senadores Rothe, Galíndez y Serrey, acordando pensión a la señora Maria Ercilia Vidart de Garramuño.

5.—Formación de las ternas para la provisión de los obispados de Santiago del Estero y Resistencia.

6.—Continúa la consideración del despacho de la Comisión de Agricultura, Industrias y Comercio, en el proyecto de ley, en revisión, sobre colonización. Queda pendiente.

7.—Apéndice: Inserción solicitada por el senador Laurencena.

—En Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de julio de 1940, siendo la hora 15, dice el

Sr. Presidente (Patrón Costas). — Queda abierta la sesión.

Martínez, Figueroa, Rothe, Pinto, García Fernández, Laurencena, Tamborini, Caballero, Cepeda, Arancibia Rodríguez y López Peña.

Sr. Secretario (Figueroa). — Ha obtenido 16 votos el padre José Weimann.

Sr. Presidente (Patrón Costas). — Queda designado el padre José Weimann.

Se va a proceder a tomar la votación para el segundo término.

—Votan por monseñor Luis Alberto Montes de Oca los señores senadores: Serrey, Galíndez, Martínez, Rothe, Pinto, García Fernández, Laurencena, Caballero, Cepeda, Arancibia Rodríguez, López Peña y Landaburu.

—Votan por monseñor Juan Retambay los señores senadores: Santamarina, Sánchez Sorondo, Figueroa y Tamborini.

Sr. Secretario (Figueroa). — Ha obtenido 12 votos monseñor Luis Alberto Montes de Oca y 4 votos monseñor Retambay.

Sr. Presidente (Patrón Costas). — Queda designado monseñor Luis Alberto Montes de Oca.

Se va a proceder a elegir el tercer miembro de la terna.

—Votan por monseñor Saravia González los señores senadores: Serrey, Santamarina, Sánchez Sorondo, Landaburu, Galíndez, Martínez, Figueroa, Rothe, Pinto, García Fernández, Tamborini, Caballero, Cepeda, Arancibia Rodríguez y López Peña.

Sr. Secretario (Figueroa). — Ha obtenido 15 votos monseñor Saravia González.

Sr. Presidente (Patrón Costas). — Queda designado monseñor Saravia González para el tercer término de la terna.

Se va a tomar la votación para el primer término de la terna del obispado de Resistencia.

—Votan por monseñor Nicolás Di Carlo los señores senadores: Serrey, Santamarina, Sánchez Sorondo, Landaburu, Galíndez, Martínez, Figueroa, Rothe, Pinto, García Fernández, Laurencena, Tamborini, Caballero, Cepeda, Arancibia Rodríguez y López Peña.

Sr. Secretario (Figueroa). — Ha obtenido 15 votos monseñor Nicolás Di Carlo.

Sr. Presidente (Patrón Costas). — Queda designado monseñor Di Carlo para el primer término de la terna.

Se va a tomar la votación para el segundo término.

—Votan por monseñor José Brunel Pruyas los señores senadores: Tamborini, Laurencena, Figueroa, Landaburu, Arrieta, Sánchez Sorondo, Santamarina, Serrey y Arancibia Rodríguez.

—Votan por monseñor Jorge Saravia los señores senadores: García Fernández, Pinto, Rothe, Martínez, Galíndez, López Peña, Cepeda y Caballero.

Sr. Secretario (Figueroa). — Han obtenido 9 votos monseñor José Brunel Pruyas y 8 votos monseñor Saravia.

Sr. Presidente (Patrón Costas). — Queda designado monseñor José Brunel Pruyas para el segundo término de la terna.

Se va a votar el tercer término de la terna.

—Votan por monseñor Antonio Biagioli, los señores senadores: Tamborini, Laurencena, García Fernández, Pinto, Rothe, Figueroa, Martínez, Galíndez, Landaburu, Arrieta, Sánchez Sorondo, Santamarina, Serrey, López Peña, Arancibia Rodríguez, Cepeda y Caballero.

Sr. Secretario (Figueroa). — Ha obtenido 17 votos monseñor Antonio Biagioli.

Sr. Presidente (Patrón Costas). — Queda designado monseñor Antonio Biagioli para el tercer término de la terna.

6

COLONIZACION

Sr. Presidente (Patrón Costas). — Al orden del día.

Sr. Laurencena. — Pido la palabra.

En la sesión anterior, señor presidente, presenté las estadísticas demostrativas de que la expansión agrícola operada en el período comprendido entre 1895 y 1914, que alcanzaba a un crecimiento de 1.000.000 de hectáreas por año, término medio, había sufrido una detención en el período 1914 - 1937, el cual, con un aumento total de 3.500.000 hectáreas, arroja un promedio de 150.000 hectáreas por año, nada más.

Hice notar que esta detención era un síntoma de crisis, de la crisis que sufrió la agricultura desde el comienzo de ese período. Analizando las estadísticas de las distintas regiones, demostré también en aquella exposición, cómo en algunas el crecimiento, aunque sujeto a un ritmo más lento, se mantuvo, mientras que en otras se había producido la caída vertical con reducciones que oscilaban entre el 30 y el 70 % del área sembrada el año 1914.

Exhibí después estadísticas referentes al régimen de las explotaciones rurales, basándome en el censo de 1937 y deteniéndome en las cifras relativas al número de productores propietarios. Con relación al número de estos productores, hice notar la diferencia fundamental que existe en las distintas provincias y aun en las distintas regiones dentro de cada provincia. Y, finalmente, destaqué el hecho, que parece demostrado por el censo, de que la zona propiamente agrícola y la más próspera del país, que comprende Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y La Pampa, es la que tiene menor proporción de productores propietarios, oscilando entre el 27,77 %, que corresponde a La Pampa, y el 44,3 %, que corresponde a Córdoba, mientras que provincias cuyo desarrollo agrícola había retrocedido, como Catamarca, La Rioja y San Luis, y cuyo estado de prosperidad era, sin duda, menor, tenían una alta proporción de productores propietarios, superior al 60 por ciento.

Y terminé afirmando que estos hechos llevaban a la conclusión, quizás a la única conclusión cierta, de que no existe una fórmula de relación visible entre el número de propietarios productores y el desarrollo y la prosperidad de la producción agrícola.

La interrupción de la sesión en ese momento, por falta de quórum, me impidió formular algunas observaciones alrededor de los hechos y estadísticas expuestos.

Desde luego, yo no he de participar de la opinión del señor senador por Santa Fe de que en las zonas agrícolas de las provincias, los arrendatarios están en mejor situación que los propietarios; por lo menos, no es posible admitir este concepto con generalidad, sin desconocer que excepcionalmente puede haber algunos agricultores arrendatarios que puedan estar en condiciones mejores que algunos agricultores propietarios. Pero esto no puede ser la regla general. Si fuera exacto que los propietarios que cultivan la propia tierra están en peor situación que los arrendatarios, es claro que entonces los propietarios que arriendan la tierra deberían estar en mucha peor situación que

aquellos, y en ese caso, ni el valor de la tierra se mantendría tal elevado, ni los propietarios tendrían tanto interés en conservarla, y se desprenderían de ella con más facilidad.

Además, reuniéndose en una sola persona las condiciones de propietario y productor, es decir, suprimido el arrendamiento, es suficiente un menor rendimiento para que el colono sienta compensado su trabajo, porque el factor «interés del capital» pasa a segundo plano.

Pero si la tierra arrendada tiene que producir para el productor y para el propietario —y para éste si el interés del capital es fundamental, como que es su único beneficio—, el rendimiento debe ser mayor, para que puedan tener utilidades los dos.

Para mí, señor presidente, es indiscutible que el régimen de propiedad de la tierra es superior al sistema de arrendamiento, de cualquier forma de arrendamiento, no sólo desde el punto de vista económico, que es el que parece impresionar más al señor senador por Santa Fe, sino, y muy principalmente, desde el punto de vista social.

La propiedad de la tierra que se trabaja, enaltece moral y espiritualmente al individuo; le da un sentimiento de independencia, forma la base y la estabilidad de la familia, crea el hogar, el verdadero hogar, por el confort y las mejores condiciones de vida y lleva a principios de orden, de disciplina y jerarquía, que son de consecuencias sociales infinitamente superiores a las ventajas económicas.

De manera que cuando yo he traído estos hechos y demostraciones, no ha sido para llegar a conclusiones contrarias a la propiedad de la tierra por el productor. He querido demostrar, simplemente, que este factor, al que no le quito importancia, no es el que está gravitando en primer plano en la crisis agrícola del país, y que priman otros factores generales y no pocos locales, que son los que urge remover.

Y bien, señor presidente; después de haber examinado el aspecto relativo a los productores propietarios, conviene decir algunas palabras sobre los arrendatarios. El censo de 1937 clasifica a los arrendatarios en tres categorías principales: arrendatarios en dinero, arrendatarios en especie y arrendatarios que pagan el canon en una forma mixta, es decir, parte en dinero, parte en especie y, a veces, en especie con un porcentaje, con una cantidad fija, etcétera, pero siempre en una forma mixta.

Lo primero que llama la atención en el examen de esta estadística, cuando se estudian las diversas provincias del país, es la diferente pro-

porción que en unas y en otras guardan las distintas formas de arrendamiento. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires predomina en una proporción extraordinaria de tres a uno, el número de arrendamientos en dinero sobre los arrendamientos en especie; y esta proporción se invierte en las demás provincias, donde predominan, a veces, hasta llegar a una proporción de tres a uno, los arrendamientos al tanto por ciento de la producción, con relación a los arrendamientos en dinero.

Las consecuencias, en líneas generales, de estos hechos, son bien visibles. Es indudable que el arrendamiento por especie, por un tanto por ciento de la producción, es el arrendamiento, desde el punto de vista económico, quizá ideal, en el sentido de que vincula la suerte del propietario a la del colono; pero no se puede negar que, en cambio, el arrendamiento en dinero, siendo en el fondo quizá perjudicial, porque echa sobre el colono todos los riesgos de la producción, significa quizá una mayor prosperidad por parte del colono, puesto que sin un estado de prosperidad evidente, es imposible que pueda soportar la carga que representa el pago en dinero. Esto nos llevaría a este punto, que ya hice notar en la sesión anterior como contradictorio, porque parece destruir algunos de los principios que hemos tenido como exactos: de que en las provincias donde hay menor número de propietarios, encontramos mayor número de arrendatarios en dinero, como en la provincia de Buenos Aires.

Pero estas conclusiones se ratifican y permiten extraer algunas otras, si examinamos, no ya el número, sino el monto de los arrendamientos en dinero.

La estadística analítica de los arrendamientos en dinero en las distintas provincias contiene datos que son sumamente interesantes y que creo deben preocupar a los poderes públicos. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, sobre un total de veinte mil arrendatarios que pagan los arrendamientos en dinero, hay 9.777, que forman casi el 50 %, que pagan más de 25 pesos anuales por hectárea de tierra. Los que conocemos nuestra producción agrícola, sabemos perfectamente bien que ese arrendamiento de más de 25 pesos por hectárea es realmente excesivo y que tiene que gravitar en una forma enorme sobre la economía del colono.

Esa misma situación de Buenos Aires existe en Santa Fe, donde también más del 50 % de los arrendatarios pagan más de \$ 25 por hectárea, conviniendo dejar constancia que tanto en

Buenos Aires, como en Santa Fe, hay un porcentaje alto de arrendatarios que pagan más de 50 pesos por hectárea.

En Córdoba y Entre Ríos, la situación es inversa. Evidentemente el monto de los arrendamientos en esas provincias es muy inferior. Por ejemplo, en Córdoba hay 2.700 arrendatarios en dinero y apenas la quinta parte excede de pesos 25 la hectárea. En Entre Ríos la proporción es menor. De 2.600 arrendatarios en dinero, apenas 154 superan los 25 pesos.

Conviene dejar constancia que esta estadística se refiere exclusivamente a los arrendamientos de chacras, no a los arrendamientos de pequeñas extensiones destinadas a huertas o granjas en las proximidades de los ejidos de los pueblos, que lógicamente, no sería de extrañar que tuvieran arrendamientos altos.

El mismo fenómeno de la elevación extraordinaria de los arrendamientos lo notamos también en los arrendamientos por especie y tal vez en esto quizás más acentuado.

En Buenos Aires, sobre 14.600 arrendatarios, en cifras redondas, al tanto por ciento solamente 3.800 pagan hasta el 25 % y 10.473 que representan el 60 ó 70 %, pagan más del 25 por ciento.

El mismo fenómeno y más o menos en la misma proporción se observa en Santa Fe y los términos se invierten con respecto a Córdoba y Entre Ríos.

Es claro, señor presidente, que de estas simples cifras no es posible extraer conclusiones absolutas y definitivas para hacer un juicio cabal del asunto. Habríamos necesitado que la comisión redactora del censo, completando esta tarea con una investigación, nos hubiera dado una información más completa para juzgar hasta dónde es de grave y excesivo el monto de los arrendamientos que se cobran en las zonas agrícolas ganaderas del país.

Pero otro aspecto que es necesario contemplar, cuando se trata de arrendamiento, es que tal vez, la elevación de las tasas, no es lo más grave que tiene este sistema.

Lo más grave y perjudicial es la inestabilidad de los productores, las condiciones precarias de vida que deben llevar; la mala habitación, anti-higiénica y sin ningún confort, la deficiencia de las instalaciones necesarias para el trabajo racional, y, finalmente, las condiciones de los contratos que impiden a los arrendatarios las explotaciones granjeras anexas, que son el auxiliar más importante para el éxito económico y para el bienestar de la familia.

Hay contratos que impiden la crianza de vacas lecheras, aves y cerdos, lo que es absurdo. Por eso no comparto las opiniones del señor senador por Santa Fe. La situación de los arrendatarios, es en general mala, y creo que debe merecer la atención de los poderes públicos...

Sr. Caballero. — ¿Me permite? Yo creo que tiene razón el señor senador, y con los datos que son muy ilustrativos a este respecto, tiene razón sobrada en el sentido de que él apoya una de las ideas que expresé aquí respecto de las funciones que debía tener el Consejo Agrario. Me parece que un estudio de los arrendamientos en la situación actual sería muy conveniente, y casi podría absorber toda la ley, dándole al Consejo Agrario esas facultades, estableciendo perfectamente bien, una justa distribución de lo que produce el colono y de lo que debe recibir el propietario. Eso es lo que nosotros hicimos en 1912. Desde entonces, algunas variantes deben haber ocurrido, y las conozco también en parte. Quería decir estas palabras para apoyar la observación tan justa que acaba de hacer el señor senador.

Sr. Laurencena. — Yo he hecho este breve análisis, aunque no he traído, porque no he encontrado la posibilidad de hacerlo, soluciones ciertas y definitivas, para llegar a esta conclusión: creo que los datos y las cifras traídas al Senado demuestran la necesidad indispensable de dictar una buena ley sobre arrendamientos. Pero podría alguien preguntarme por qué no la he proyectado teniendo este concepto. Lo declaro, señor presidente, con toda lealtad: porque creo que ni yo, ni ningún senador, puede estar en condiciones de proyectar una ley de arrendamientos, que debe comprender a todo el país, con las deficientes informaciones estadísticas que poseemos o que podemos recoger en diversos puntos. Entiendo que esto debe ser tarea del Ministerio de Agricultura, que es el único que puede estar en condiciones de allegar datos o informaciones estadísticas que comprendan a todo el país; porque sería gravísimo error, legislar con el conocimiento de regiones parciales del país.

Por ejemplo, yo conozco Entre Ríos; creo conocerlo bien, pero, a través de las estadísticas que he leído, he hecho notar que, precisamente, Entre Ríos está, con respecto a una y otra forma de arrendamiento, en situación inversa a las provincias de Buenos Aires y Santa Fe. De tal manera que, con el conocimiento parcial de una región, cuya situación no es equiparable a la de las otras provincias, es absolutamente imposible proyectar una buena ley de arrendamientos.

Voy a pasar, señor presidente, a otro punto de los que se han traído a la discusión en este debate. Naturalmente, tratándose de una ley de colonización, debía tratarse también el problema demográfico, que, a través de las numerosas publicaciones hechas y de las informaciones traídas a este debate, se ve que constituye una verdadera preocupación general.

Se ha dicho, y, desde luego, con verdad, que el campo argentino se despuebla. Yo no me encuentro en condiciones, en éste como en otros puntos, según habrán observado los señores senadores, de dilucidar a fondo la cuestión; pero tengo la impresión, señor presidente, de que no basta presentar escuetamente las cifras de las estadísticas, para justificar la alarma que algunos publicistas y algunos comentaristas de la materia han exteriorizado. No basta decir: hay tantos pobladores rurales que representan tal tanto por ciento; tantos urbanos, que representan un elevadísimo tanto por ciento de población, para decirlo todo. Esto puede significar mucho como no puede significar nada. La población rural de un país lógicamente debe estar relacionada, en cuanto a la cantidad, con la naturaleza de las explotaciones que en ese país se hacen, con la forma de trabajar en ese país, con el grado de progreso técnico que haya alcanzado la industria y, por fin, con el rendimiento humano. Respecto a este punto, es interesante recordar nuevamente, porque ya lo ha hecho aunque con brevedad, el señor senador por la Capital, doctor Palacios, la opinión que ha emitido el estadígrafo señor ingeniero Bunge.

Sr. Landaburu. — También lo ha citado el miembro informante de la Comisión de Agricultura.

Sr. Laurencena. — Sí, señor senador, sólo que el señor miembro informante citó al ingeniero Bunge, si mal no recuerdo, en cuanto a la estadística del porcentaje de pobladores urbanos y rurales, y leyó solamente el primer párrafo de un valioso trabajo de aquel publicista. Ahora yo voy a referirme a la opinión del ingeniero Bunge en cuanto al rendimiento del factor humano en el país, que es muy interesante, porque indudablemente atenúa mucho las apreciaciones a que la estadística puede conducirnos.

Dice el ingeniero Bunge: «¿Cómo se explica que un país que produce casi todas las materias primas agrícolas que consume, y que exporta grandes cantidades de las mismas, tenga una población rural tan escasa en cifras absolutas y en cifras relativas? Y ello se debe sin duda, a la enorme superficie de sus praderas y sus grandes extensiones fértiles, a su clima benigno y

a su sistema extensivo de producción con abundancia de ganados y de maquinaria agrícola.»

Después de algunas consideraciones, el ingeniero Bunge llega a esta conclusión, a la que voy a referirme simplemente para evitar a los señores senadores, la fatiga de tener que oír una lectura in extenso: «Estas cosas explican —dice el ingeniero Bunge— el hecho de la ínfima población rural de la Argentina y su detención. Esas 3.300.000 personas, producen tanto o más que 14.000.000 de europeos, dedicados a la producción ganadera y agrícola.»

Es claro, señor presidente, que si por los sistemas de trabajo y de cultivo, por la feracidad de las tierras, en fin, por todos los factores que pueden concurrir, con 3.300.000 habitantes rurales podemos producir tanto como 14.000.000 de europeos, si tuviéramos 6.000.000 de habitantes, con una capacidad de producción similar a la de aquéllos, yo me pregunto ¿qué haríamos en este momento con nuestra producción? Produciríamos el doble, y entonces esta abundante población rural nos habría creado problemas que sería difícil resolver. De manera que yo no creo, señor presidente, que podamos decir que sea una felicidad permanente y un bien que debamos perpetuar, nuestra escasa población rural, pero creo sí que no debemos procurar el aumento de esa población rural si ha de ser a costa necesariamente de un aumento de la producción agrícola de consumo y exportación, porque entonces, sería evidentemente crear nuevos problemas, y muy graves por cierto, y muy difíciles de resolver, porque no dependen de nuestra acción.

Pero que éste es un hecho natural en el país y que no hay que juzgarlo con tanta ligereza, lo demuestra una circunstancia que voy a hacer notar a los señores senadores y que quizá ha pasado desapercibida para muchos de los que han analizado estos problemas.

Se dice, señor presidente, con frecuencia, en una forma un poco simplista, que la campaña del país se despuebla por la crisis, por la miseria que hay en la campaña, por la falta de trabajo. Y parece que efectivamente ésa debiera ser la causa más importante; pero los hechos y las pocas estadísticas que poseemos parece que demostraran lo contrario. Voy a hacer notar a los señores senadores lo siguiente: el año 1895 teníamos 2.294.000 habitantes rurales, que representaban el 58 % de la población del país, y cultivábamos 4.892.000 hectáreas. En 1914, nuestra población rural aumenta, en cifras absolutas, a 3.300.000 habitantes, es decir, aproximadamente un millón más, o sea, el 50 %, más o

menos, de la población anterior, pero el porcentaje, en proporción a la población del país, disminuye al 42 %, es decir, de 58 % a 42 %. Pero en ese período, señor presidente, la extensión sembrada del país aumenta de 4.892.000 hectáreas a 24.582.000, es decir, que mientras la población aumenta en el 50 %, la extensión sembrada se quintuplica, es decir, que aumenta en un 500 por ciento.

Lo que es evidente, señor presidente, y eso no parece que fuera necesario demostrarlo, es que el período de 1895 a 1914, es el período de la gran prosperidad de la campaña argentina, porque esta enorme expansión agrícola responde a la mayor productividad agrícola y del trabajo rural. Y la prueba está también en que la mayor parte de los pequeños propietarios que existen en el país, que no es un número despreciable, pues alcanza a cerca del 40 % sobre el total de productores, se hicieron en esa época.

Bien, pues; en plena prosperidad, cuando debía abundar el trabajo, cuando se quintuplica la extensión sembrada y cuando se quintuplica, o mucho más, la producción, la población rural disminuye.

La verdad es que si el fenómeno no tiene la significación que yo le doy, habrá que buscar con mucha cautela cuál es el significado de este fenómeno, pero no es posible, de todas maneras, llegar a la conclusión ligera de que nuestra campaña se despuebla por la miseria o por la crisis, porque la campaña ha empezado a despoblarse, precisamente, en el momento de su más grande prosperidad.

Sr. Landaburu. — Si me permite el señor senador por Entre Ríos, quiero significarle que aunque la explicación del fenómeno puede ser un tanto difícil, porque responde a causas complejas, lo indudable es que esa mayor proporción en el área de los cultivos correspondiente a un menor aumento de la población rural, es la resultante evidente de los cultivos extensivos, que han florecido en esa época de nuestra evolución agraria.

Sr. Laurencena. — Pero también habría que significar lo siguiente: que nuestra población disminuye en la campaña, pero que aumenta su productividad en forma extraordinaria, porque antes dos millones de habitantes alcanzaban para cultivar cuatro millones de hectáreas, y después tres millones alcanzaban para cultivar veinticuatro millones.

Sr. Landaburu. — Son los grandes cultivos.

Sr. Laurencena. — Es que hay una serie de factores, señor presidente, que no es posible en-

global en una sola clase. Yo voy a referirme a algunos, susceptibles de hacer incurrir en errores, no sé en cuanto, pero seguramente en forma apreciable, en la confección de la estadística de la población rural.

Nuestra agricultura tiene un defecto difícil de subsanar, tal como la de dar ocupación al bracero únicamente durante un período breve de dos, tres o cuatro meses. Durante el resto del año, el bracero no tiene nada que hacer en el campo.

Yo desearía saber si los señores senadores, si los señores miembros de la comisión, comparten esta opinión.

Sr. Landaburu. — Sí, señor senador. Por eso la comisión ha introducido un capítulo nuevo sobre colonización granjera que tiende, en gran parte, a corregir esa situación evidente, a fin de que durante los períodos de inacción, el trabajador agrícola pueda dedicarse a la producción de otros renglones de granja.

Sr. Laurencena. — Como yo trato de demostrar que esta estadística de la población rural, un poco alarmista, no es del todo exacta, voy a agregar lo siguiente: que una gran parte de la población de la campaña, durante la época de falta de trabajo en la campaña, va a vivir a la ciudad, porque en esa época en la ciudad se intensifican algunos trabajos que se han reducido durante la época de la cosecha...

Sr. Caballero. — Es muy exacto.

Sr. Laurencena. — ... y porque la mujer y los hijos consiguen trabajo más o menos permanente y los hombres lo consiguen aunque sea accidentalmente. Pero cuando llega el momento del trabajo agrícola, salen en cantidades enormes para la campaña.

Yo no puedo afirmar qué cantidad sale de Paraná, ciudad en que vivo, para la campaña en la época de la cosecha del trigo y del lino, porque es un poco difícil el contralor, pero, en cambio, puedo afirmar, porque puedo ofrecer estadísticas que cuando se produce la cosecha del maíz en Santa Fe, pasan por el puerto de Paraná de 15 a 20 mil personas que van a trabajar a la cosecha, viviendo la mayor parte de ellas en Paraná.

Estos hombres es posible que figuren en las estadísticas como habitantes urbanos, porque allí tienen sus familias y allí pasan la mayor parte del año, pero son obreros rurales, evidentemente.

Entonces, insisto, la estadística, en este caso como en otros, no se puede tomar así a base de cifras escuetas, sin explicarlas, sin comprender los factores que pueden influir en un sentido o en otro.

Es claro que lo ideal, lo que nos conviene y nos interesa, es aumentar la población rural en términos absolutos y relativos, para lo cual es necesario que busquemos la forma de que la población rural, esa población adventicia y flotante, quede en el campo, como con muy buen acuerdo dice el señor senador que lo ha proyectado la comisión, pero no me parece que las medidas un poco imprecisas que contiene el despacho sean la mejor solución.

Creo que hay un aspecto más importante que todo eso para transformar un poco nuestra campaña. Con frecuencia, cuando se habla del proceso de urbanización de la población del mundo, se menciona mucho la concentración industrial, no obstante lo cual advertimos, al confrontar las estadísticas de los países esencialmente industriales, que éstos presentan estadísticas mejores que las nuestras. Es que no hay que confundir concentración industrial con centralización industrial, que es otra cosa distinta. En nuestro país hay un proceso de centralización industrial que es perjudicial y que no ocurre en otros países como Alemania y Estados Unidos.

Es claro que antes, en la época de inventos, como el de la máquina de vapor, que citaba el señor senador por Buenos Aires, la industria tendía a concentrarse y a centralizarse, pero felizmente estamos en la actualidad en condiciones, porque la ciencia nos da elementos, de procurar descentralizar esas industrias. Hoy día la máquina de vapor está muy atrasada. Por un cable se puede enviar a ciudades muy lejanas y a la campaña, corriente eléctrica para la fuerza motriz que permite la instalación de las industrias.

Pero en nuestro país, donde tenemos una ciudad como Buenos Aires, donde hay fábricas de queso con productos del interior, donde hay fábricas de productos alimenticios, de dulces, de conservas de frutas, etcétera, es decir, todas las fábricas y todas las empresas que debían estar fuera de la ciudad, hemos hecho una centralización inconveniente. Y este fenómeno, que se observa en Buenos Aires, con relación al resto del país, se observa también en cada provincia en las ciudades de alguna importancia con relación a las villas, pueblos y estaciones y con relación a la campaña.

El progreso más importante que podíamos hacer, señor presidente, es el de fomentar las industrias anexas a la producción agrícola y propender que se radique en las zonas rurales, descentralizándolas de los grandes centros de población.

Durante los últimos años se han realizado en

el país algunos ensayos, diremos así, de colonización que conviene analizar, aunque sea someramente. Esos ensayos han sido realizados por el Banco Hipotecario Nacional, por el Banco de la Nación Argentina y por las provincias de Buenos Aires y de Entre Ríos. El ensayo del Banco Hipotecario Nacional, según opinión generalizada, que comparte la comisión y yo también, ha sido un fracaso o, por lo menos, sus resultados han sido sumamente menguados.

El Banco de la Nación, ateniéndonos a la memoria presentada este año, que corresponde al año 1939, pareciera que ha tenido un poco más de éxito.

El Banco de la Nación actúa en este asunto en dos formas: primero, efectuando préstamos para compra de propiedades y para mejoras en los mismos, ya en poder de los particulares, de acuerdo con la ley de crédito agrícola, y segundo, fraccionando las propiedades que ha tenido que adquirir en pago de sus créditos. En las dos formas, según la memoria, parece haber tenido éxito, por lo menos desde el punto de vista financiero.

En materia de préstamos de colonización yo he tenido que discriminar, como se dice ahora, en la que acusa la cifra de 86.000.000 por concepto de préstamos y de 21.000.000 por concepto de cancelaciones y amortizaciones. Pero esta información global no es precisamente lo que más interesa. En esta estadística se involucran los dos conceptos: de préstamos para compra de inmuebles y préstamos para introducción de mejoras.

Haciendo la división encontramos que la operación propiamente para compra de tierras, importa las siguientes cifras: para agricultura, 1.732 operaciones, por 19.966.000 pesos; para ganadería 511 operaciones, con 7.934.000 pesos; en conjunto, 2.243 operaciones por valor de 27.900.000 pesos.

Parece, según la estadística, que una gran parte de estos préstamos han sido amortizados, y que los deudores han cumplido con bastante regularidad sus compromisos.

La segunda forma en que interviene el banco en esta clase de operaciones, es, como he dicho, la venta de propiedades que estaban en su poder. Lamentablemente, en este punto, la memoria del banco es muy poco explícita; sólo dice que se han vendido 170.000 hectáreas por un valor de 12.700.000 pesos, dando la distribución geográfica que abarca casi todo el país. Pero no nos ha dicho, desgraciadamente, en qué forma se ha subdividido, no menciona los lotes,

el tanto por ciento medio del monto de los préstamos o del saldo deudor, ni las condiciones que exige a los adquirentes.

Pero yo he procurado ese informe, y llego a la conclusión —que no lo digo como crítica al banco, sino como aclaración de sus operaciones, pues creo que el banco no puede hacer otra cosa—, llego a la conclusión, repito, de que el banco actúa con criterio comercial, lo que es lógico, y no puede pretender el Congreso que el banco actúe con criterio propiamente de colonizador nacional, comprometiéndolo recursos ingentes y que no están destinados a ese fin. De modo que, posiblemente, el éxito financiero de las operaciones del banco se debe a ese criterio. Vende a colonos que le ofrecen garantía, buena garantía.

Esa no es, evidentemente, una colonización del tipo de la que estamos discutiendo y que debemos tener en cuenta al tratar este despacho. Sin embargo, es interesante observar que el éxito del banco se manifiesta en operaciones que en el fondo importan, en realidad, un préstamo para colonizar, lo que demostraría que este aspecto del problema no debe despreciarse y que si hubiera la posibilidad de disponer de recursos suficientes, no habría que cerrarse dentro de la fórmula estrecha de la colonización por cuenta del Estado que adquiere las tierras, las subdivide y las entrega bajo una cantidad de condiciones que no son del caso analizar ahora.

Habría quizá que considerar la posibilidad de estudiar la forma de utilizar el préstamo de colonización, que es un aspecto muy interesante y sobre lo cual este proyecto no entra a legislar.

Respecto a los ensayos colonizadores de las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos, la verdad es que podemos decir muy poco. Son dos ensayos sumamente recientes. El de la provincia de Entre Ríos es del año 1935 y el de la provincia de Buenos Aires, de 1937. Lógicamente, con el sistema de compra de tierras, subdivisión, etcétera, se pierde una cantidad de tiempo, hasta que pueda ser entregada a los colonos. Mientras se hace después la selección, y demás trámites hasta entregar la tierra, pasa el tiempo, de modo que los colonos apenas hace uno o dos años que están en posesión de la tierra y no se puede saber ningún resultado todavía. Es claro que hay algunos factores que producen algunas dudas respecto del éxito que estos ensayos puedan tener. Por ejemplo, respecto a la provincia de Buenos Aires, sabemos por las publicaciones que se han hecho, que se han comprado las tierras a precios que oscilan

entre 250 y 304 pesos la hectárea. Son los precios corrientes en la provincia de Buenos Aires. Se ha pagado lo que vale, pero es evidente que son precios excesivos para las posibilidades del colono.

Hay que tener en cuenta, además, que, al hacerse la subdivisión, se abren calles, lo que origina una pérdida de tierra que tiene que ser compensada con el precio de enajenación, de manera que se puede calcular que éste se encarece en un 15 ó 20 %. Quiere decir que estas tierras pueden ser vendidas en 300, 350, 370 pesos, precios realmente excesivos para un hombre de trabajo, que no cuenta con nada más que la producción de la tierra.

En Entre Ríos las tierras han sido adquiridas a precios lógicamente algo inferiores a éstos, pues los precios corrientes allí oscilan entre 100 y 140 pesos. Pero, a su vez, la producción de Entre Ríos, por una serie de factores, es de menor rendimiento económico que la de Buenos Aires. Por eso, no obstante los menores precios, los colonos seguramente van a encontrar dificultades.

Según la información que yo poseo del actual gobernador de Entre Ríos, efectivamente se ha comprobado ya que los colonos tienen dificultades para pagar esas tierras, y por esa circunstancia, el gobernador de Entre Ríos anunció en su último mensaje, que remitirá a la Legislatura un proyecto para transformar el sistema de pago actual, que es el de cuota fija anual, por el de un tanto por ciento de la producción, como una manera de ensayar esta nueva forma, que tal vez resulte más fácil de cumplir por parte del chacarero.

En resumen, señor presidente, estos pocos ensayos, que han dado alguna experiencia, inducirían a pensar que la colonización oficial en los últimos años no ha sido un éxito.

Al presentar el proyecto que los señores senadores conocen, el año 1936, y ahora en esta exposición, reiteradamente he hablado de la crisis agrícola por que pasa el país. He afirmado categóricamente que durante los últimos 25 años se ha producido y acentuado una crisis agrícola en el país; pero sería interesante que pudiéramos determinar las causas de esa crisis, porque tal vez en este punto se han difundido algunos errores.

Voy a tratar, no obstante las dificultades del asunto, de examinar las causas de esta crisis.

Desde luego, me parece que conviene eliminar algunas causas. La primera que elimino, como origen de la crisis agrícola, son las dificultades de la colocación de la cosecha. Es exacto que

hace algunos años estamos encontrando dificultades para la colocación de nuestros productos, dificultades que ahora se han acentuado; pero, es evidente que esas dificultades no las hemos tenido durante la época en que la crisis se presenta y acentúa, es decir, desde los años 1914 a 1937, lo que evidencia que no es ésta la causa de la crisis que estamos pasando.

La segunda causa a que podría atribuirse la crisis agrícola, sería la reducción de los rendimientos de las explotaciones rurales, y esta causa yo niego que exista, y lo voy a probar.

En la comisión que estudia desde hace dos años la implantación del seguro agrícola en el país, que tengo el honor de presidir, con los elementos existentes en el Ministerio de Agricultura de la Nación, se ha confeccionado un cuadro de las extensiones sembradas, cosechadas, pérdidas, porcentaje de la producción, producción en toneladas, rendimiento en kilos por hectárea, desde 1912 hasta 1937, o sea 25 años. Y bien, señor presidente, respecto a los rendimientos de las principales sementeras esta estadística nos da los siguientes resultados. Debo hacer una aclaración: para juzgar los rendimientos tomo períodos quinquenales, porque lógicamente, los períodos anuales no ofrecen ninguna certeza, porque las variaciones de un año a otro son grandes por los factores ocasionales y circunstanciales que pueden inducir a error.

En cambio tomando la estadística quinquenal, es claro que los errores se subsanan por compensación de un año con otro. Así encontramos con respecto al trigo, que durante el primer quinquenio, 1912-17, la producción media del país fué de 648 kilos por hectárea. En el segundo quinquenio del 1917-1922, aumenta a 871. En el tercero, se produce una pequeña baja, a 829 kilos; en el cuarto, comprendido de 1927-32, aumenta a 879 y en el último quinquenio, es decir, de 1932 a 1937, aumenta a 945.

Es evidente, señor presidente, que el índice, la curva, diremos, de la estadística de rendimiento, es de aumento y no de disminución. El promedio de rendimiento, por quinquenio, durante este período ha aumentado de 648 a 945, lo que es muy acentuado.

Lo mismo ocurre con el lino, que en el primer quinquenio tiene el rendimiento medio de 528 kilos por hectárea; en el segundo 668, en el tercero 678, en el cuarto 701 y en el último una pequeña reducción a 685 kilos, por la gravitación de un gran quebranto durante un año.

Lo mismo ocurre con el maíz. Tiene en el primer quinquenio un rendimiento medio de 1.326 kilos; en el segundo de 1.630; en el tercero de 1.882 y en el cuarto de 1.954, apare-

ciendo el último con una pequeña reducción, a 1.840 kilos.

No obstante esta pequeña reducción, se ve que el índice es de mejoramiento en el rendimiento.

Con razón, podemos eliminar como causa de la crisis la reducción y los malos rendimientos de las cosechas.

La tercera causa que debe eliminarse: es la de grandes pérdidas de cosecha por accidentes climáticos o por plagas. También la estadística a este respecto indica que no es así. Voy a entregar para la inserción en el Diario de Sesiones, el cuadro completo confeccionado en la Comisión de Seguros Agrícolas (1). Y voy a dar únicamente los datos en síntesis. La pérdida media total en 25 años, en el trigo, es del 9,3 %, tomando la relación entre las hectáreas cultivadas y las cosechadas.

En el lino, las pérdidas representan el 8,2 %, y en el maíz se elevan al 20,2 %. Pero en esta última estadística —la del maíz— hay que observar que no es exacta en cuanto a que este porcentaje signifique efectivamente pérdidas. Aquí nuevamente nos encontramos frente a la necesidad de estudiar las estadísticas. La razón de ser de esta aparente enorme pérdida de maíz obedece a que en muchas regiones se siembra ese cereal, no para cosechar el grano, sino como forraje. Lógicamente, esas hectáreas no se cosechan, y entonces van a la estadística como pérdidas, no siendo, en realidad, tales. Puede afirmarse que las pérdidas o quebrantos del maíz no exceden de las del trigo y lino, es decir, que deben estar entre el 8 y el 9 por ciento.

Por último, la otra causa de crisis que debemos descartar, a mi juicio, es la de los bajos precios. Es exacto que el precio es una cosa muy fluctuante, pero también...

Sr. Martínez. — Si no fueran bajos los precios, estaríamos en plena prosperidad.

Sr. Laurencena. — Permítame, señor senador. He dicho reiteradamente al examinar estas causas, que me refiero a las causas creadoras de la crisis, desde el año 1914, no a las causas ocasionales o circunstanciales sobrevenidas después. En este momento nos encontramos frente a una crisis de carácter internacional. Y, efectivamente, con respecto a los precios, el fenómeno actual ya no es el mismo que en la época anterior que abarcan las estadísticas.

En efecto, el cuadro demuestra una gran baja de precios desde 1932 en adelante. Pero, en cambio, el primer período, desde el año 1912

hasta el año 1930, revela precios por encima de los precios normales, en general. El año 1930 saben los señores senadores que se ha producido una baja de precios generales, que están por debajo de lo normal. Pero insisto en que no hablamos de las causas de la crisis en estos últimos años, sino de las causas que han producido la crisis permanente, orgánica, que arranca desde el año 1914.

Ahora, eliminadas estas causas y agregando, además, que evidentemente algunos otros factores, como el de la mejor forma de trabajo, los perfeccionamientos técnicos evidentes introducidos en la agricultura nacional, que en estos últimos años ha progresado a pesar de la crisis; si agregamos eso, entonces, será necesario extremar un poco la investigación para encontrar las causas que han producido esta crisis. A mi juicio, señor presidente, las causas son, en conjunto, con más o menos gravitación, las siguientes: primero, la elevación de los costos de producción; segundo, la elevación del valor de la propiedad y de los arrendamientos; tercero, el mayor costo de las maquinarias empleadas en la agricultura a que está obligada la industria por el progreso creciente; a los transportes que, indudablemente, se han encarecido; a la deficiencia de la comercialización, que obliga al colono a efectuar la venta en un período breve, lo que produce indudablemente una acumulación de productos en el mercado y favorece las maniobras de los acaparadores; a la falta de un crédito agrícola apropiado, que indudablemente obliga al colono a endeudarse con el comercio, lo que gravita en una proporción extraordinaria sobre el costo de lo que el colono necesita, y por último, a las gabelas, que también se han aumentado sensiblemente, especialmente en los últimos años. Es indudable, señor presidente, que este proyecto de ley de colonización no va a remover ninguna de estas causas; lo que conseguirá únicamente es hacer un número reducido de propietarios rurales, si es que consiguen llegar a ser propietarios rurales, que ingresarán en esa enorme masa de agricultores que están expuestos a todas las contingencias, y sobre todo, que están sometidos a las condiciones económicas de este medio desfavorable y hostil y que en la primera crisis van a perder la tierra que han adquirido un día por intermedio del Estado. Porque es necesario insistir en esto, señor presidente: hemos pasado y estamos pasando un período en que muchos propietarios rurales, agricultores que habían adquirido su tierra en la época de prosperidad

(1) Véase pág. 641.

y expansión agrícola, están perdiéndola ahora. Y no hay por qué pensar que estos colonos propietarios, que va a hacer ahora el Consejo Agrario, no estén expuestos en la primera crisis intensa que venga, a sufrir las mismas consecuencias.

Para abreviar esta exposición, señor presidente, voy a terminar ocupándome de las manifestaciones hechas por el señor ministro de Agricultura en su discretísimo discurso, dando la opinión del Poder Ejecutivo, favorable a este proyecto. Las palabras del señor ministro de Agricultura son mejores que el proyecto.

Sr. Martínez. — Eso es propio de toda condición humana. Los propósitos superan siempre a la realidad.

Sr. Laurecena. — Yo voy a ocuparme de ellas como una forma de hacer la crítica del proyecto.

Empezó el señor ministro de Agricultura diciendo que había que producir y fomentar la inmigración agrícola para la campaña. Yo creo, señor presidente, que esta afirmación del señor ministro importa resolver varios problemas previos que, desde luego, no ha resuelto el proyecto de colonización, y estos problemas en síntesis son los siguientes: si este país ha de continuar siendo un país agropecuario exclusivamente; si podemos tener seguridades de que vamos a poder seguir colocando nuestra producción, acrecentada con las nuevas masas de inmigrantes productores, y por último, si no debemos crear una industria manufacturera en el país, aunque sea incipiente o rudimentaria para la cual podemos necesitar inmigrantes capaces y competentes en los distintos oficios.

A mi juicio, señor presidente, son falsas e inconvenientes las dos concepciones extremas. Yo creo que no debemos, por lo menos en este momento, intensificar nuestra producción agraria, debemos transformar nuestros elementos de trabajo y mejorar sus condiciones y favorecer, en lo posible, la conversión de los arrendatarios en propietarios y otros factores de mejoramiento; pero que no debemos hacer un esfuerzo financiero para aumentar la producción del país. Creo también, que si no debemos hacer un gran esfuerzo y dar un gran impulso al desarrollo de nuestras industrias manufactureras, debemos, en cambio, seleccionar aquellas que creamos más factibles, más adecuadas a nuestro ambiente, estimulándolas en una medida prudente, hasta donde sea conveniente para nuestro consumo, por lo menos, y no cerrar las puertas a la inmigración que

venga con esos propósitos, ni a las iniciativas privadas que tiendan a mejorar y a beneficiar nuestras industrias.

Posiblemente, dentro de esta política de moderación, diríamos así, de limitación de la producción agrícola y de expansión moderada de la producción industrial, encontraremos la mejor solución.

Con respecto al proyecto de colonización ha dicho el señor ministro que el primer problema y obstáculo que se presenta para una buena colonización es el de la selección del colono. Es, indudablemente, un aspecto interesantísimo. No se puede hacer propietarios a todos los que aspiran a serlo; luego, la lógica es que el esfuerzo financiero se dedique a hacer propietarios a los más capaces, a los que demuestren mejores condiciones personales, mejor capacidad técnica, etcétera.

Es claro que frente a esta solución la selección del colono es un asunto sumamente importante.

El ingeniero Coni, que ha hecho un interesante estudio sobre colonización, en los fundamentos de su proyecto da las pautas, las formas y los procedimientos de una buena selección de colonos. No voy a molestar a los señores senadores leyendo inextenso esos juicios del ingeniero Coni, pero les recomiendo su lectura, porque ella convence acerca de las enormes dificultades que ofrece la selección del colono aspirante a propietario.

Y como después de adoptadas todas esas precauciones, se encuentra siempre el Estado, o los organismos del Estado, frente a la posibilidad de haber hecho una mala selección, por las dificultades a vencer; atendiendo a esas razones es que yo presenté, el año 1936, un sistema de selección que la comisión no ha querido aceptar y que yo considero insustituible, a falta de otros sistemas mejores, y que consiste en entregar la tierra no ya en venta, sino de entregarla por un periodo de prueba, diré así, lo que yo hacía por un arrendamiento —aunque no hago cuestión acerca del calificativo— y que tiende, señor presidente, a que el colono esté durante un periodo de 3, 4 ó 5 años, viviendo y trabajando bajo el contralor del organismo colonizador, para conocer realmente sus condiciones de trabajo, su capacidad y moralidad, sus aptitudes generales.

Todas las demás formas de selección que se basan en referencias, informes, certificados, posesión de máquinas, etcétera, son susceptibles de inducir frecuentemente a error. Esta es la única

que, por lo menos, reduce al mínimo los errores en materia de selección.

Se ha referido el señor ministro a la buena elección de la tierra. Es indudable que esa es una de las condiciones fundamentales. Sobre este punto me limitaré a expresar, que lo lamentable es que el Estado no haya empezado por proceder con ese criterio y con ese pensamiento, en lo que se refiere a las propias tierras, ya que en este momento todavía no sabemos sus aptitudes agrológicas, si son o no colonizables. Tenemos referencias en un sentido y en otro, según sea la repartición que los da; pero, no existe un estudio científico y serio respecto a este punto. El proyecto, y me complace en decirlo, a este respecto contiene cláusulas bastante previsoras y prolifas.

Otro punto que ha merecido la atención del señor ministro y con razón, es el que se refiere al precio de las tierras que se adquieran. Hay que tener en cuenta que este proyecto está inspirado, principalmente, en el pensamiento de adquirir tierras por compra o por expropiación para colonizar. Este aspecto de la adquisición de la tierra es muy importante, porque el precio de compra es la base indispensable. A menos que el Estado empiece por perder una parte apreciable del valor de las tierras, lógicamente tendrá que vender en una forma proporcional y siempre a un precio algo más elevado que el de compra.

Este es el grave peligro de colonizar con tierras que deben comprarse en la zona agrícola del país, donde ya el valor de la tierra ha alcanzado precios excesivos. Hemos visto cuando analicé el ensayo de colonización de la provincia de Buenos Aires, que allí se ha pagado entre 250 y 300 pesos la hectárea de tierras, que tendrán que venderse, por lo tanto, a 300 ó 350 pesos. lo que resulta realmente excesivo. En Entre Ríos, según los precios de adquisición tendrá que venderse de 140 a 180 pesos la hectárea, lo que es también excesivo para dicha zona.

El proyecto en cuanto a las expropiaciones, contiene algunas medidas previsoras, con el pensamiento de evitar el precio excesivo a fijarse por los tribunales. Cuando se discuta en particular voy a hacer notar cómo estas medidas, bien intencionadas, deberán necesariamente fracasar en la práctica y que no producirán los resultados que la comisión espera.

Aludió el ministro, también, haciendo referencia a la ley, a la forma de pago de la tierra. Dijo que no se debían exagerar las facilidades de pago, que esta era una ley económica y no filantrópica. Hizo referencia con esto a la cláusula que establece el precio de venta con un

servicio de 2 ½ % de interés y ½ % de amortización. El señor ministro dijo, concreta y categóricamente, que consideraba bajos estos precios.

Sin duda, el señor ministro comprende las consecuencias financieras que este asunto va a tener para el Estado. Conviene tener en cuenta lo siguiente: La reducción del interés, en esta clase de operaciones, a la mitad del interés corriente —considerado como corriente el interés del Banco Hipotecario Nacional— significa, prácticamente, la reducción a la mitad del precio de venta, es decir, que el Estado realmente vende la tierra a la mitad de lo que le cuesta. Ese es, prácticamente, el resultado de la reducción del interés.

Pero las consecuencias del sistema adoptado para rebajar el 50 % del valor, escapan tal vez a lo que la comisión ha previsto, porque si la venta se realizara al interés y amortización corrientes, 5 % y 1 %, el colono pagaría la tierra en el plazo que se le pagaría al Banco Hipotecario Nacional un préstamo ordinario del mismo, es decir, 35 ó 36 años; pero con el sistema ideado por los autores del proyecto, del 2 ½ % de interés y ½ % de amortización —que después de pagado el 50 % se convierte en 5 y 1 %—, el resultado es que se vende la tierra a un plazo de 60 ó 70 años, es decir, a un plazo que excede la vida media de un hombre y mucho más la vida probable de un agricultor que debe comenzar por comprar su tierra recién a los 30 ó 40 años de edad.

Sr. Landaburu. — Permítame una interrupción, señor senador.

Su apreciación es evidentemente exagerada. El comprador de una parcela, de acuerdo con las soluciones del despacho, debe pagar, además del ½ % de amortización anual acumulativa y 2 ½ % de interés, la cuota que se denomina del «fondo de ahorro», que puede llegar hasta el 4 % anual, según el artículo 38. De manera que, en realidad, la anualidad oscila entre el medio y el cuatro y medio por ciento; de tal suerte el tiempo que necesita para pagar totalmente el terreno es un lapso muy inferior al que ha indicado el señor senador.

En el proyecto del Poder Ejecutivo figuraba como un apéndice una serie de cuadros demostrativos de la forma en que se operaba la amortización del precio de acuerdo con las soluciones del despacho. El tiempo depende del monto de la cuota, del fondo de ahorro que el Consejo Agrario Nacional fije anualmente y que puede llegar hasta el 4 %. Si fija una cuota elevada se pagará en menos tiempo; si la cuota es redu-

cida se pagará en más tiempo. Es una disposición previsor, amplia y elástica, que permite al Consejo Agrario Nacional contemplar todas las situaciones del agricultor y allanar las dificultades en que puede haberse colocado en los malos años agrícolas.

Sr. Laurencena. — Es exacto que el proyecto ha ideado el sistema de la cuota de ahorro que aparentemente debe producir resultados como los que indica el señor senador. Pero yo, en mi crítica, me he basado en dos circunstancias: primero, en que es indudable que lo cierto y lo seguro es el 2 ½ % de interés y el ½ % de amortización establecido en la ley. Lo otro puede o no producirse; depende de una serie de factores y circunstancias que no son solo exclusivamente los resultados financieros del año, porque puede influir también la situación económica del colono; pero, además, cuando se trate en particular el asunto, voy a hacer notar que este fondo del 4 % de ahorro, que parece haber sido introducido con ese propósito fundamental, está reglamentado en el mismo despacho en una forma tal que puede afirmarse que no tendrá el destino de pagar la tierra. Eso lo voy a demostrar en la discusión en particular.

Por último, el señor ministro, y por supuesto el señor miembro informante, que ha aludido a estas cuestiones, se refirió a la cláusula que exige el 10 % del pago al contado y a la cláusula que prevé la existencia de un crédito habilitador.

Mi concepto, señor presidente, sobre estos puntos, es el siguiente, en pocas palabras: es indudable que las dos cosas pueden existir en la ley; puede colonizarse, exigiendo el 10 %, o estableciendo crédito habilitador. Lo que no es concebible y que no ha aclarado el despacho, es que puedan hacerse las dos cosas al mismo tiempo. El despacho no separa estos dos conceptos y no sabemos si el pensamiento de los redactores admite que pueda exigirse el 10 % a un colono y al mismo tiempo hacérsele crédito habilitador.

Esos dos principios responden a dos formas distintas de colonización: si se ha de exigir el 10 %, es porque se le exige capacidad al colono para pagar parte de la tierra y para instalarse; si se le da crédito, se considera que no tiene capacidad para pagar parte de la tierra y para instalarse, y por eso necesita que se le abra crédito. Son dos formas absolutamente distintas. Una de ellas debe ser dirigida directamente a convertir en propietarios a los actuales agricultores, que tienen experiencia y capital; la otra,

es una forma de colonización que tiende, evidentemente, a hacer agricultores a gente que no lo es o que siéndolo, no ha podido reunir el pequeño capital que significa la cuota del pago al contado y lo necesario para instalarse.

Bien, señor presidente; he fatigado, sin duda, ya al Honorable Senado con esta exposición demasiado pesada, de manera que voy a terminar estableciendo las conclusiones a que yo he llegado.

Si durante los últimos 25 años, la acción oficial y la privada han fracasado, no sólo financieramente, sino en el propósito de hacer al productor propietario de la tierra, parece inoportuno un proyecto de colonización como el que discutimos.

En consecuencia, el Estado debe limitarse por ahora a colonizar las grandes extensiones que posee y las de las reparticiones autónomas y bancos, previo un estudio serio, que no se ha realizado aún, de las condiciones agrológicas y climáticas de las zonas y de las especies apropiadas para el cultivo en ellas.

Esta colonización debe hacerse ensayando, en cuanto sea posible, nuevas fórmulas y procedimientos, como el período inicial de arrendamiento y el pago del precio por un tanto de la producción.

Debe tratarse de resolver de inmediato el problema de los arrendamientos, que afecta la economía agrícola del país y que es un problema permanente.

Es necesario también y más urgente, crear un ambiente económico que conduzca a la estabilidad del agricultor propietario y aun del arrendatario, instituyendo un buen sistema de crédito agrícola personal y real, extendiendo y afianzando las organizaciones cooperativas, mejorando el régimen de comercialización y del transporte, instituyendo el seguro agrícola, favoreciendo el progreso técnico de la industria.

Es indispensable aliviar las gabelas que pesan sobre las industrias agrícolas y entre ellas, en primer término, el de las diferencias de cambio, que incide sobre los productos agrícolas en una proporción mayor que cualquier otro impuesto.

Es necesario favorecer y estimular la evolución, que los hechos nos señalan, hacia la explotación de cultivos industriales y paralelamente estimular el establecimiento de las industrias transformadoras de la producción agrícola.

Y debe propenderse con medidas legislativas a descentralizar las industrias, especialmente aquellas que elaboran materias primas nacionales.

Al establecer nuevos tipos de industrias, debe darse preferencia a aquellas que requieren mayor mano de obra en la época que no la emplean los grandes cultivos, como una forma de atenuar la despoblación del campo.

Nada más, señor presidente.

Sr. Martínez. — Pido la palabra

Señor presidente: la preocupación por poblar la campaña argentina, cuyos habitantes emigran cada vez más hacia las ciudades; el propósito de establecer una economía sana, mediante la distribución de los beneficios de nuestra industria agropecuaria en el mayor número de personas; el noble objetivo de disminuir el proletariado rural y extender y ampliar en cambio una clase de pequeños propietarios, para afianzar en ellos nuestras instituciones libres y asegurar de este modo los beneficios de la libertad y el respeto por la personalidad humana, justifican plenamente la preocupación del Poder Ejecutivo y del Congreso por la sanción de una ley de colonización.

Como país agrícola y ganadero, hemos progresado extraordinariamente en el arte de producir. Nuestras carnes no tienen, por su calidad y su menor costo de producción, prácticamente, rivales; nuestros granos se producen en abundancia, con rendimientos apreciables, dada la forma de cultivo extensivo que es nuestra norma. Hasta ayer, el comercio de exportación de estos productos escapaba al control de los productores y del gobierno argentino. La ley de carnes, los elevadores de granos, la ley de granos, la política de los precios mínimos, instituciones creadas durante el progresista gobierno del general Justo, han dotado al país de los instrumentos más indispensables para regular su propio comercio y permitir al productor que obtenga el máximo de beneficio compatible con los precios mundiales y las economías autárquicas de los países europeos.

Mientras los precios de la agricultura fueron remuneradores, la extensión cultivada fué también en aumento, pero hemos llegado a un punto en que muchas veces los productores no tienen precios remuneradores y he ahí la causa en que estriba la crisis agraria que nos conmueve.

Oportunamente me he de referir en detalle a las observaciones que sobre este aspecto ha hecho, en su interesantísimo y profundo discurso, el señor senador por Entre Ríos, con el cual, si bien en algunos puntos estoy en divergencia, en cambio, en otros me encuentro plenamente de acuerdo.

Pero si el país ha progresado en su técnica

agrícola, si la Nación ha podido organizar, aunque sea en una forma incipiente, el comercio de los nobles productos de la tierra, en los que asienta a su vez su principal economía, no ha resuelto todavía en forma satisfactoria el problema de la distribución de los beneficios del campo y no ha podido arraigar la población rural argentina, ni vencer la inmensidad del desierto que sigue, como ayer, conspirando contra su progreso.

Basta recordar —el dato ya repetido en este debate— que según la estadística de 1938, de los 12.700.000 habitantes con que cuenta el país, sólo 3.320.000 viven en la campaña, mientras 9.440.000 en los centros urbanos y que según el censo de 1937 de los 279.000.000 de hectáreas que tiene la Nación, están bajo cultivo tan sólo 28.000.000; destinadas a pastoreo 124.000.000, a pesar de que serían aptas para cereales 80.000.000, y 109.000.000 más para ganadería.

Es claro, señor presidente, que no por existir tanta cantidad suplementaria de tierra apta para una mayor extensión de la agricultura y de la ganadería, es un programa inmediato de gobierno su utilización, no sólo porque ello demandaría considerables capitales a emplearse en su explotación, cuanto por el problema del envilecimiento de los precios de los productos pecuarios, que serían su consecuencia; precios ya reducidos, en varios de sus principales rubros, a cantidades que no compensan su producción, como es el caso del maíz, por ejemplo, determinado a su vez por las condiciones especiales en que se halla nuestro comercio de exportación.

Creo, por tanto, señor presidente, que más que un aumento de la capacidad productora agraria argentina —y en ello concuerdo en absoluto con el señor senador por Entre Ríos— una ley de colonización, sin descuidar desde luego el aumento del área explotable, radicaría en la parcelación de las tierras para multiplicar los propietarios de las mismas, en la difusión del crédito agrario fácil y barato que permita transformar los arrendatarios en propietarios y en la disminución de las cargas fiscales sobre los que trabajan la tierra, para estimular su labor, y en una defensa, señor presidente, del precio básico para los agricultores y ganaderos a fin de hacer remunerativas sus tareas y crear el estímulo necesario a sus empresas.

El señor senador por Entre Ríos, en su sesuda exposición de esta tarde, hacía un análisis de las causas de nuestra crisis agrícola, y la atribuía en primer término a la falta de mercado.

Yo no sé si lo he interpretado bien al señor senador.

Sr. Laurencena. — Es a la inversa.

Sr. Martínez. — No sé si lo he interpretado al señor senador, pero me parecía que él descartaba justamente la falta de mercados para la colocación de nuestros productos.

Sr. Laurencena. — Permítame una aclaración, señor senador. La descartaba, como causa de la crisis permanente iniciada el año 1914, en mi concepto, y acentuada progresivamente a través de este período, sin desconocer que ahora, en estos momentos, tenemos dificultades de colocación; que no sabemos qué tiempo van a durar y que, lógicamente, podemos suponer que va a prolongarse. Insisto en que ahora tenemos dos crisis que inciden sobre la agricultura: la permanente, que, en mi concepto, es el desequilibrio entre el costo de la producción y los precios normales de los productos, y la crisis que se siente actualmente por falta de colocación de los productos.

Sr. Martínez. — Yo no comparto la opinión del señor senador por Entre Ríos. Hasta el año 1929, puede decirse que la crisis temporaria de la agricultura y la ganadería argentina no era motivada por la disminución en la capacidad adquisitiva de nuestros mercados de consumo. Pero desde 1929, desde la gran crisis mundial al presente, no se puede negar un hecho visible, y es que la autarquía económica de los principales países, en realidad, es el motivo determinante para que la producción argentina, noble en su calidad y con un bajo costo de producción, no pueda tener acceso a esos mercados.

Sr. Laurencena. — Estamos de acuerdo, señor senador, pero desearía saber si el señor senador está de acuerdo conmigo en que antes del año 1930 ya estaba en crisis la agricultura argentina.

Sr. Martínez. — Estaba parcialmente en crisis, señor senador. Por ejemplo, hemos soportado la crisis ganadera de los años 1921 y 1922 determinada por un descenso vertical en los precios de la ganadería argentina, como una de las consecuencias de la posguerra anterior.

Sr. Laurencena. — Me he referido a la agricultura, no a la ganadería.

Sr. Martínez. — Pero en la agricultura, descartando ciertas crisis estacionarias o parciales, en realidad, el agricultor tenía una buena remuneración por sus productos hasta el año 1920. Justamente a raíz de la última crisis mundial, a raíz de la proliferación en los países europeos de economías cerradas, a raíz de la protección a sus productos agrícolas, es que los productos argentinos no han podido tener acceso a esos mercados. Tenemos, por ejemplo, el caso del

maíz argentino, hoy prácticamente sin colocación, maíz argentino que no ha podido ser exportado a Estados Unidos, cuando las cifras de nuestra exportación serían insignificantes en comparación con el consumo que demandaría aquel país. Tenemos el caso del trigo; recuerdo que una vez se publicó un estudio en virtud del cual, el importe de los abonos que necesitaba la agricultura italiana para producir el trigo, representaba el valor que podía tener el mismo volumen de trigo enviado a aquel país.

Es justamente, señor senador, —y allí radica, a mi modo de ver, la parte más aguda del problema agrario argentino— el hecho de que, siendo un país de escasa población con cultivos extensivos y con rendimiento noble, a los que se ha referido el señor senador, estos productos no puedan tener acceso a los grandes mercados consumidores y tengan que ser eliminados parcialmente, como en el caso de la última cosecha de trigo, mediante la Junta de Granos, o tengan que esperar, como ahora el maíz, una gran solución artificiosa para dar una salida a ese artículo.

Yo creo, como el señor senador, que no puede ser factor de las crisis la disminución de las cosechas, porque discriminando variaciones ocasionales, como en algunos años de intensa sequía, el promedio en realidad de la producción argentina ha ido en aumento, y los rendimientos de las cosechas a las cuales se ha referido el señor senador han aumentado, para no referirme sino al renglón del trigo, de 6,48 a 9,45 quintales por hectárea, y se debe justamente a la inteligente política que en materia agraria inició un estadista argentino un poco olvidado de sus compatriotas, que causó una verdadera revolución en los métodos de cultivo y en la enseñanza; me refiero al ex ministro de Agricultura, doctor Le Breton. Fué a raíz del ministerio del doctor Le Breton, y a a su iniciativa en materia de estudios de semillas y de profundidad en los cultivos, de enseñanza agrícola en el país, que aumentó a los pocos años el porcentaje de rendimiento por hectárea, en relación al que tenía antes.

Sr. Laurencena. — ¿Quiere permitirme una interrupción? Deseo hacer un acto de justicia histórica.

El ministro de Agricultura que inició aquí esa fundamental tarea del estudio de las semillas y del mejoramiento técnico de los cultivos, fué un ministro de un gobierno conservador. Por eso digo que quiero hacer este acto de justicia histórica. Fué el doctor Adolfo Mugica, y es interesante hacer esta referencia: cuando el

doctor Le Breton reinició después de mucho tiempo esta tarea, y empezó a buscar los técnicos, se dirigió a Italia y trajo al país al señor Strampeli. Cuando el señor Strampeli vino aquí, le dijo al doctor Le Breton: me extraña que usted me haya llamado, porque aquí en el país hay el mejor técnico en genética que existe, es fulano de tal, que vive en Bahía Blanca. Había sido traído por el ministro Mugica y abandonado después por el gobierno, se instaló en una chacra próxima a aquella ciudad.

Quería hacer esta aclaración, reconociendo desde luego en el doctor Le Breton, de quien soy amigo, el gran mérito de haber replanteado esta cuestión, para la que se necesitaba un poco de coraje, pues ya había un ministro que lo había intentado y gobiernos que habían hecho fracasar la iniciativa.

Sr. Martínez. — Me complace mucho, señor presidente, la rectificación amable del señor senador por Entre Ríos y su actitud de justicia para el ex ministro del régimen, doctor Mugica.

Sr. Landaburu. — Así establecemos la concordancia agrícola y política, por lo menos momentáneamente.

Sr. Martínez. — Yo creía que en materia de mejoramiento de nuestros cultivos la iniciativa había sido puramente radical, pero veo complacido que en esto, como en otras cosas, siempre el régimen es el que ha iniciado el buen camino.

Sr. Laurencena. — Nada más, porque después lo ha abandonado.

Sr. Martínez. — Entre Mugica y Le Breton hubo otro gobierno.

Sr. Laurencena. — Hubo varios.

Sr. Landaburu. — Que no vaya a terminar mal este corso de flores entre los señores senadores. *(Risas.)*

Sr. Martínez. — El señor senador por Entre Ríos se refería con acierto a la observación de que no sería conveniente en un país como éste, afectado con una crisis agraria, la idea contenida en el proyecto de despacho que está a nuestra consideración, y afirmada por el señor ministro de Agricultura: fomentar una inmigración aunque esa inmigración fuera seleccionada.

Soy el primero, señor presidente, en reconocer todas las ventajas que ha tenido para nuestro país la inmigración, que es, en realidad, la que lo ha hecho; pero creo, también, que mientras no podamos vender nuestras cosechas, mientras siga en Europa un régimen de autarquía económica, mientras los vasos comunicantes de una economía liberal, que cada día se aleja más del mundo, no existan, sería un absurdo aumentar artificialmente la población y destinarla a

cultivos con cuyos productos mañana no sabríamos qué hacer.

Es evidente que una mayor producción agraria entonces y serviría para intensificar la crisis, porque, en virtud de la conocida ley económica de la oferta y la demanda, incidiría la mayor producción inmediatamente sobre el precio de los productos pecuarios.

Bien, señor presidente; volviendo al tema central de la colonización, fácilmente se comprende que un problema tan arduo, de tan profundo contenido social, de tan hondas repercusiones económicas, que afecta a distintos intereses y se vincula a todo género de actividades, habría de despertar la preocupación de los hombres de gobierno y de los publicistas.

— Ocupa la Presidencia el presidente de la Comisión de Obras Públicas, senador doctor Héctor González Iramain.

El distinguido señor miembro informante de la Comisión de Agricultura, Industrias y Comercio, señor senador Landaburu, que tan elocuentemente ha fundado el despacho...

Sr. Landaburu. — Muchas gracias, señor senador.

Sr. Martínez. — ... ha hecho una prolija reseña de las distintas iniciativas habidas en materia de colonización. También nos ha trazado un excelente bosquejo sobre la legislación extranjera en la materia, y en verdad, señor presidente, a esta altura del debate, en que varios oradores han hecho uso de la palabra y expuesto, desde distintos ángulos, sus puntos de vista, sería una redundancia insistir sobre estos tópicos. Pero, no obstante, conviene destacar, para hacer un acto de justicia, que la iniciativa que está ahora a consideración del Congreso se debe a un proyecto del gobierno del general Justo, siendo su ministro de Agricultura el doctor Miguel Angel Cárcano.

¿Qué se propone ese proyecto? El proyecto del Poder Ejecutivo se propone, en síntesis, aumentar los propietarios rurales, transformar, en la medida de lo posible, a los actuales arrendatarios en propietarios; se propone estimular al pequeño y al mediano propietario. Por eso el mensaje dice: «Somos todavía el país de los grandes propietarios y arrendatarios. No buscamos esta forma de explotación de la tierra. La hemos recibido de muy atrás. Era el sistema que imponían las circunstancias geográficas y sociales de un medio en formación. En la Conquista, como en la Colonia, en los albores de la Independencia, como en la anarquía y en la organización nacional, no era posible pensar en predios reducidos para la explotación de las industrias

agrarias. Lo que entonces era una imposición de las circunstancias y del medio, hoy podría aparecer como un germen de efectos perniciosos, y la asombrosa capacidad de adaptación del país lo han transformado y adecuado a las exigencias del nuevo tiempo. El programa de producción capitalista para las industrias rurales no puede eliminar las posibilidades y ventajas de la explotación por pequeños y medianos productores. En la Argentina, no son dos grupos que se excluyen, la grande y pequeña explotación agraria, sino dos formas económicas que se complementan y sostienen», punto de vista que también ha expuesto con toda claridad el señor miembro informante de la comisión, senador Landaburu.

Continúa el mensaje: «Necesitamos ahora estimular la pequeña y media propiedad. Necesitamos crear una familia agricultora unida y fuerte, que sea un auténtico elemento de progreso económico y un vivo factor de bienestar y estabilidad social. El trabajo agrario jornalizado, el bracero adventicio es en nuestro país una triste realidad agraria que debemos eliminar. Un régimen racionalmente organizado no puede hallar en él ningún fundamento, porque resulta extraño al grupo productivo, sin vínculos directos y reales con el suelo que trabaja. Su ambición consiste en pocos días de trabajo, con altos salarios. La pequeña y media explotación elimina este mal elemento.

«Fomentándola contribuiremos a llenar la aspiración en que se debate el país, de consolidar una democracia sana. El pequeño propietario difundido y acicateado por la seguridad económica propia y la de su descendencia, constituirá un grupo nacional con profundo sentido de la libertad y poderosa personalidad. La similitud de intereses y sentimientos de pertenencia, crea la fuerza que se opone a la opresión y mantiene libre el camino del espíritu hacia las mejores conquistas.»

No creo, señor presidente, que nadie pueda dejar de compartir tan nobles aspiraciones, pero desgraciadamente, con el proyecto de ley sancionado por la Cámara de Diputados, y que consideramos en revisión en el Senado, proyecto que tanta expectativa provoca y tantas esperanzas estimula, ¿se logrará la transformación que se anhela? Sin desconocer la excelente inspiración que lo alienta y las buenas disposiciones que contiene, me invade a mí también un poco del escepticismo del señor senador por Entre Ríos. Creo, como él, que para que un plan de colonización de vasta envergadura no fracase, sería menester previamente resolver los problemas del

crédito agrícola, de la cooperación, de la comercialización de los productos, de las condiciones agrícolas de las diferentes regiones del país. Es cierto que tenemos una excelente ley de crédito agrícola que está dando muy buenos resultados, la que también ha sido iniciativa de legisladores demócratas nacionales, pero ella es insuficiente.

Según la memoria del Banco de la Nación, en comparación con 1938, el saldo de las operaciones de crédito agrario aumentó en la suma de 9.035.000 pesos al finalizar el año 1939. Se destacan en ese sentido, los préstamos hipotecarios para adquisiciones de inmuebles rurales e introducción de mejora, que ha discriminado con tanto acierto el señor senador por Entre Ríos, cuyo saldo era de 53.126.700 pesos al 31 de diciembre de 1938, y se eleva ahora en la memoria del año 1939 a 65.460.200 pesos.

La memoria del banco dice a este respecto: «Desde el mes de septiembre de 1935, fecha en que fué iniciada esta clase de créditos, hasta el 31 de diciembre de 1939, el banco acordó 5.943 préstamos, por la cantidad de 86.525.506 pesos, gravando 956.594 hectáreas, lo que arroja un promedio de 90 pesos por hectárea. De las sumas concedidas en préstamos hipotecarios, se amortizó ya la cantidad de 21.065.282 pesos de acuerdo con la siguiente demostración:

	\$ m/n.
Préstamos acordados desde septiembre de 1935 hasta el 31 de diciembre de 1939 .	86.525.506
Cancelaciones y amortizaciones en el mismo periodo	21.065.282
Saldo al 31 de diciembre de 1939 .	65.460.224

«La considerable reducción —y esta es la parte substancial de este dato— de 21.065.282 pesos, no es el producto puro del reembolso de capital por amortización normal, sino también de la cancelación de préstamos antes de su vencimiento, en razón de los excelentes resultados obtenidos con la cosecha en algunas regiones del país y que los productores, con muy buen criterio, destinaron a redimir parte o el total de las deudas contraídas con el banco.»

Continúa la memoria sobre otros aspectos, diciendo: «De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 de la ley de crédito agrario, el banco ha procedido también a la parcelación y venta de las tierras que le fueron adjudicadas en defensa de sus créditos, contribuyendo así a cooperar en la subdivisión de la tierra, para hacerla accesible al mayor número de compradores con aptitudes para explotarla.»

Y viene aquí una lista que pido se intercale en esta parte de mi exposición, sobre los prés-

tamos por provincia, por hectárea, importe de las ventas, etcétera.

Es la siguiente:

«Hasta fines del año 1939 se había procedido ya al parcelamiento de 170.000 hectáreas por un valor total de \$ 12.700.000, conforme a la siguiente distribución geográfica:

PROVINCIAS O TERRITORIOS	Superficie		Importe de la venta
	Hectáreas	Fracción en mts. cuad.	
Buenos Aires	34.662	3,691	6.905.705,10
Córdoba	26.826	3,048	1.469.052,74
Entre Ríos	4.921	8,675	175.843,61
Mendoza	5.715	6,117	1.229.179,04
Santa Fe	58.321	6,072	2.489.434,35
San Juan	505	4,155	137.150.—
Corrientes	4.679	0,184	155.627,36
La Rioja	27.625	4,591	14.088,98
Tucumán	1.000	0,000	3.500.—
San Luis	209	0,702	2.341,92
La Pampa	2.500	0,000	115.000.—
Total	166.966	7,235	12.696.923,10

«Al 31 de diciembre de 1939, los adquirentes de campos mediante el plan antes comentado, adeudaban \$ 6.309.000 por este concepto.»

Es claro que esta política de crédito agrícola que va desarrollando el Banco de la Nación, sería necesario que fuera estimulada por los poderes públicos, aumentando el margen de disponibilidades del Banco de la Nación para estos préstamos para adquirir las propiedades rurales, destinando, se me ocurre, por ejemplo, los fondos que le ha pagado o que debe pagarle el Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias.

Me parece que la recuperación que va realizando el Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias, que según la memoria de este año se eleva a \$ 70.000.000 m/n., de los cuales más de \$ 40.000.000 m/n. corresponderían al pago de su deuda originaria con el Banco de la Nación, debería destinarse a ampliar esta sección de crédito del Banco de la Nación y no como entiendo que se ha realizado, a la adquisición de títulos del Estado, que parece ser una de las preocupaciones dominantes, que, desde luego, ni el señor senador por Entre Ríos ni yo compartimos.

Estos mismos datos nos revelan cómo muchas veces los buenos propósitos son siempre inferiores a las realidades y a las posibilidades. El banco ha invertido en préstamos hipotecarios, deducido lo que ya se ha cancelado, \$ 65.000.000 moneda nacional, que originariamente fueron \$ 86.000.000 moneda nacional que representa, en números redondos, 1.000.000 de hectáreas, sobre las cuales hay 5.943 préstamos. El banco, además, ha prestado para los otros fines de la

ley, que no eran la adquisición de inmuebles ni mejoras, en números redondos, para no fatigar la atención del Senado, —la cifra está aquí en la memoria— \$ 200.000.000 moneda nacional. Vale decir, que el Banco de la Nación tiene prestados para el crédito agrícola, en este momento \$ 265.000.000 moneda nacional.

Entonces, yo me pregunto, ¿qué ilusiones nos podemos hacer los que somos un tanto realistas, con este proyecto de colonización que, en síntesis, sólo destina como recursos \$ 100.000.000 moneda nacional?

Desde luego, no guarda proporción el propósito o la idea generosa que alienta el deseo de transformar la condición de los agricultores argentinos, con los medios que se destinan para realizarlo. Pero no nos apartemos de la cuestión, ya que oportunamente he de insistir sobre este tópico.

Así como el Banco de la Nación ha procedido con acierto en materia de colonización, no puede decirse lo mismo del Banco Hipotecario Nacional. Los señores senadores conocen perfectamente bien la modificación que tuvo lugar hace casi 20 años en la carta orgánica del banco, para permitir los préstamos de colonización por el 80 % del valor de la propiedad a adquirirse.

Esa ley, en realidad, sólo sirvió para una gran especulación de tierras.

Las tasaciones fueron altas; las tierras fueron vendidas en remate a los colonos y muchas veces no estaban en regiones adecuadas para la colonización. Los colonos pagaron la prima inicial y no pudieron en muchos casos continuar el pago de los servicios. Eso se convirtió en una mora en el Banco Hipotecario, el que se quedó con las tierras y los colonos también dejaron, junto con sus recursos, las esperanzas que habían puesto en esta colonización oficial.

Los préstamos escriturados fueron 7.551, según el informe que nos dió el señor senador por San Luis. Es de advertir que desde que se puso en vigencia la ley hasta el 31 de diciembre de 1939, los propietarios que ofrecieron colonizar sus tierras fueron 1.063, por una superficie ofrecida de 2.720.415 hectáreas de tierra, que sus proponentes estimaban en un valor de 765.000.000 de pesos. Los préstamos escriturados se elevaron a 7.551, por un total de 122.000.000 de pesos. Los préstamos en vigor a esta fecha, son sólo de 125.000.000 de pesos. El monto de la deuda se ha disminuído en 26.000.000 por ejecuciones del banco y por amortizaciones voluntarias de los deudores.

Aquí no tengo la inteligente colaboración del señor senador por Entre Ríos, para que descri-

mine la parte que corresponde a las ejecuciones de la que corresponde, porque como son dos cosas tan heterogéneas que se han sumado, no es extraño...

Sr. Landaburu. — Si me permite el señor senador. Yo he dado al Senado el dato que ha sido proporcionado por el Banco Hipotecario Nacional y en la suma están englobados los dos conceptos: la reducción ha llegado a esa cantidad, tanto por amortizaciones voluntarias de los deudores, que se supone que son préstamos en vigor, como por ejecuciones del banco, lo que supone que son préstamos en mora.

Por eso, no he podido discriminar en otra forma, siendo de advertir que no son datos que figuren en la memoria, sino que para obtenerlos, la comisión citó especialmente a un alto funcionario del banco.

Sr. Laurencena. — Es una lástima que el banco no proporcione esos datos.

Sr. Martínez. — Justamente, señor presidente, me he hecho cargo de la observación de mi distinguido colega, el señor senador por San Luis, porque a pesar de que soy curioso, no pude encontrar estos datos en la memoria, y por eso me referí a su informe. Desde luego que no tenía, en ninguna forma, que atribuirle al señor senador la responsabilidad de datos que no hacía más que transmitir, de acuerdo con las informaciones que se le habían dado, datos que expuso al fundar tan elocuentemente el despacho que está a consideración del Senado.

También es bueno advertir que en la aplicación de esta ley, en realidad no tienen ninguna responsabilidad los directores del Banco Hipotecario de los últimos tiempos; es un asunto que viene de un poco más lejos; pero es curioso esto: mientras el Banco de la Nación recupera 22.000.000 de pesos en tres o cuatro años, que tiene de vigencia el crédito agrario, el otro pierde 26.000.000.

Sr. Laurencena. — Son sistemas diferentes, es otra cosa.

Sr. Martínez. — Lo que quiere decir que el sistema del Banco de la Nación es bueno y el del otro no es tan bueno.

Sr. Laurencena. — Según el objeto.

Sr. Martínez. — En materia agrícola.

Sr. Laurencena. — El Banco de la Nación no da más que el 60 %, y por eso tiene una seguridad muy grande en sus operaciones.

Sr. Martínez. — Es evidente, señor presidente, que también era menester, para aplicar en mejores condiciones este proyecto de colonización, el fomento de la cooperación a que se ha

referido el señor senador por Entre Ríos, impidiendo las trabas de orden muchas veces legal, que se establecen para reconocer las cooperativas, no obstante las claras disposiciones de la ley y las palabras precisas con que *many years ago*, muchos años hace, tuve oportunidad de pronunciar al respecto al colaborar en la sanción de esta importante ley y precisar los trámites a que debían ser sometidas aquéllas.

Otro punto fundamental, al que yo me he referido, es la comercialización de los productos del país, y aquí, en realidad, tenemos el punto neurálgico de esta cuestión agraria. Si el trabajo de la tierra no es remunerador, no puede haber colonización. La gente no se va a radicar en el campo por promesas o por discursos; la gente se va a incorporar a las rudas tareas agrícolas si en esa forma obtiene por su trabajo una compensación razonable. Pero yo pregunto: ¿pueden tener estímulo los agricultores argentinos, cuando siembran un producto, y un año no lo pueden cosechar por las condiciones climáticas, porque ha habido una excesiva sequía, por ejemplo, y cuando en otro año, esas condiciones desfavorables han cambiado y tienen entonces una excelente cosecha, como en el caso del maíz, encontrándose en cambio con que no tiene precio?

Yo bien sé que en esta materia es fácil expresar ideas generales y difícil dar las soluciones concretas o precisas.

Yo bien sé que el Poder Ejecutivo se ha preocupado de este grave problema y que el Banco de la Nación ha otorgado los préstamos necesarios para la recolección de este producto; pero no basta. No se le puede decir a la población campesina argentina que ha empleado sus trabajos y sus sudores en cosechar este producto, que este producto económicamente no signifique nada.

Se ha adelantado mucho en materia de comercialización de los productos agrarios, señor presidente. Antes, la exportación argentina, como lo he dicho, escapaba por completo al contralor de los productores y al contralor del gobierno del país. Una de las primeras iniciativas en materia de ley de granos, tuve el honor de presentarla, tomándola textualmente, se puede decir, de la ley de granos de Canadá. Pero tanto esa iniciativa, como la del ministro Le Breton, como tantas otras, quedaron en las carpetas de las comisiones.

Fué un ministro dinámico, tesonero, talentoso, luchador, un hombre salido de las más modestas capas sociales, pero que llevaba el fuego

de Prometeo, el doctor Antonio de Tomaso, el que pudo crear e imponer esta nueva legislación.

El otro aspecto, también fundamental, es el estudio de las condiciones agrícolas de las diferentes regiones del país. Y esto es substancial, señor presidente. Colonizar en tierras marginales, es un mal crasísimo; cuando la producción tiene precios altos, evidentemente que las tierras inferiores, en virtud de una ley económica, pueden ser explotadas y pueden dar rendimiento, porque el buen precio compensa el mayor esfuerzo o los años que no se obtiene recolección de esas cosechas; pero llevar colonos a radicarlos en las regiones donde no existen condiciones agrarias convenientes, donde la cantidad de lluvias —y en ello es previsor el proyecto— no sea un término medio suficiente, es llevar gente con un modesto capital para que al cabo de unos pocos años se quede sin ninguno.

Yo lo acompaño con todo entusiasmo en este punto de vista al señor senador por Entre Ríos y creo, desde luego, que hubiera sido fundamentalmente necesario que junto con el proyecto de colonización hubiera un estudio técnico del Ministerio de Agricultura, sobre las diferentes regiones del país, sobre las condiciones de productividad, sobre el término medio de su cosecha, etcétera, que permitiera asentar sobre bases sólidas y definitivas nuestra colonización.

Sr. Laurencena. — ¿Si me permite el señor senador?

Sr. Martínez. — Con mucho gusto.

Sr. Laurencena. — Es posible que este estudio demostrara también que esas llamadas regiones marginales fueran aptas para otro cultivo.

Sr. Martínez. — Como ha ocurrido con el algodón.

Sr. Laurencena. — De manera que no podemos resolver esto sin un estudio serio.

Sr. Martínez. — Es el mal de los que sembrán lino donde corresponde el algodón, o de poner frutales donde corresponde otro cultivo.

En nuestro país, felizmente, no hay lo que en otras partes ocurre: el hambre de la tierra. No hay esa carestía y necesidad de la tierra. Tenemos tierras aptas y ricas, suficientes para una producción término medio normal. No debe ser, por lo tanto, a mi modo de ver, el aumentar el área sembrada, el propósito de esta ley. Desde luego, mientras las condiciones del mundo no cambien aplicándose una política diferente en materia de economía mundial, la ampliación de la área protectora no debe fomentarse. Es evidente que cuanto mayor producción exportable

tuviéramos, y ésta fuera asimilada por los mercados de consumo, sería mejor para el país, porque su contra valor sería riqueza que se incorporaría al nuestro, dejando un saldo favorable; pero por hoy no podemos pensar en esa transformación.

El problema, en realidad, como lo interpreto yo, es buscar la transformación del arrendatario o de los agricultores nómadas, en propietarios de poblaciones estables.

Se ha hecho referencia en el debate, señor presidente, al fenómeno de la concentración urbana y se han dado los datos estadísticos proporcionados por el ingeniero Bunge, de la evolución del país en este sentido y cómo las ciudades que tenían el 33 % en el año 1869, llegan en 1938 a 74 %, al través de 42 % en 1895, de 58 % en 1914 y de 68 % en 1930.

El espíritu crítico del señor senador por Entre Ríos, que usa con tanto acierto el microscopio, ha discriminado también esta cifra y ha dado el reactivo que me parece muy interesante, estableciendo que la concentración urbana no era tal porque podía haber una población urbana que en determinados momentos realizara tareas agrícolas.

Sr. Laurencena. — Es uno de los factores.

Sr. Martínez. — Evidentemente, pero aun teniendo en cuenta este factor, la proporción del mismo no puede incidir en una forma determinada sobre esta realidad de la concentración en las grandes ciudades. Es explicable la concentración. Tiene que haber una mayor atracción de la ciudad por el mejor standard de vida, por el gran desarrollo industrial que es más importante de lo que generalmente se le atribuye, por una mayor facilidad de trabajo.

En estos últimos tiempos, en este último decenio, el país ha sufrido una gran transformación industrial que es perceptible en muchas cosas. Basta recordar las penurias habidas en el período de la guerra pasada para conseguir una serie de artículos, y en cambio en esta otra guerra ha sucedido lo contrario. Hemos progresado en esto como en muchas otras cosas.

Cuando se trató la ley de subsistencia, yo pronostiqué fácilmente de que no iba a tener esta guerra la repercusión en cuanto al encarecimiento de muchos artículos, y sostuve que el país contaba con instrumentos adecuados para defender su economía y sus finanzas. Dije que la existencia del Banco Central como regulador en materia de títulos, iba a impedir que hubiera las alarmas que en otra oportunidad pudieron existir. Y justamente todos los instrumentos monetarios y bancarios creados durante el gobierno del ge-

neral Justo, por inspiración de su ministro de Hacienda, doctor Pinedo, pasaron por la prueba de fuego demostrando su inmensa utilidad, y la experiencia ha servido para desvirtuar las críticas que se le hicieron.

Pero la principal atracción de las ciudades, y vuelvo a insistir en esto, señor presidente, es la falta de trabajo remunerador en la campaña. Entre pasar penurias en la ciudad o pasarlas en el campo, la población prefiere pasarlas en la ciudad, que tiene mejores condiciones de vida. Es claro que en esto también entraríamos ya a tocar otros problemas de la atracción de la ciudad: la necesidad de diversificar nuestra enseñanza; no provocar, como ocurre en la campaña argentina, en los hijos de los colonos o de los pequeños propietarios, la aspiración de ir a la ciudad para recibirse de maestro de escuela, para seguir una profesión liberal, para cambiar su sistema de vida. Esa atracción de las profesiones liberales, del puestito público, etcétera, debemos combatirla, pero no solamente con palabras, sino dándole oportunidad a esa población para que pueda hacer vida decente y buena en la campaña argentina.

Si bien, señor presidente, esta ley no permite abrigar fundadas esperanzas, no conviene hacerse sobre la misma exageradas ilusiones. Si bien la tierra fiscal es abundante, desgraciadamente la abundante no es la más apta. El señor miembro informante, senador Landaburu, nos decía: «Se ha preguntado a la Dirección de Tierras cuál es la superficie disponible que existe en su poder e igual informe se ha solicitado a los bancos oficiales y a las entidades autárquicas. De esos informes resulta que la tierra fiscal disponible, en 1938, era, aproximadamente, de 77.000.000 de hectáreas; la que tenía en su poder el Banco de la Nación era de 905.058 hectáreas; el Banco Hipotecario Nacional, en 1934, 481.702 hectáreas; el Consejo Nacional de Educación, en 1938, 117.260 hectáreas, y el Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias, 1.046.423 hectáreas.

«La comisión ha preguntado concretamente a la Dirección de Tierras qué extensión apta y en las condiciones del artículo 9º del despacho existe dentro de esa área disponible.»

Las condiciones del artículo 9º es que no se encuentre «a mayor distancia de 30 kilómetros de estación de ferrocarril o de camino de pavimento firme o de 400 kilómetros de mercados interiores o de puertos de embarque; que pueda obtenerse una adecuada rotación de los cultivos; que el costo del transporte se encuentre en relación económica aceptable con el valor del pro-

ducto; que la cantidad de lluvia caída anualmente y la naturaleza del suelo sean adecuadas a la clase de cultivos», etcétera.

Es decir, que éstas son las condiciones fundamentales para hacer una colonización con perspectivas de éxito.

La Dirección de Tierras le ha respondido que de los 77.000.000 de hectáreas, en esas condiciones sólo hay aproximadamente 1.628.645 hectáreas.

En cuanto a las tierras en poder de los bancos oficiales y de las entidades autárquicas, que relativamente son pocas: 1.000.000 en el Instituto Movilizador; 117.000 en el Consejo Nacional de Educación; 480.000 en el Banco Hipotecario, y 1.000.000 en el Banco de la Nación, no se tiene una información precisa, y dependerá en gran parte —dice el senador Landaburu— del criterio que tenga el consejo para su utilización.

Por otra parte, vemos que la tierra fiscal es, en realidad, de una cantidad reducida.

La tierra en poder de los bancos y de las instituciones autárquicas, que no es mucha, es necesario pagarla para utilizarla.

Sobre este punto el despacho nada dice, pero es un principio de lógica elemental que si el Consejo Agrario tomara tierras del Banco de la Nación, por ejemplo, o del Instituto Movilizador o del Consejo Nacional de Educación, tendría que pagar el importe de esas tierras.

Sr. Landaburu. — Desde luego.

Sr. Martínez. — La tierra gratis es poca; la tierra buena está en poder de los particulares, de los bancos oficiales o de las instituciones autárquicas y hay que pagarla. Luego, hacen falta recursos abundantes para realizar este plan. Es distinta en estos aspectos la reforma que el Congreso proyecta, de la reforma agraria de otros países de Europa, donde obedeció a causas distintas. En los países europeos, después de la anterior guerra, que sufrieron una revolución violenta, como Rusia, o en los nuevos Estados que se creaban, se expropiaron los grandes dominios territoriales con o sin indemnización, y se procedió a su parcelamiento por razones políticas o por razones doctrinarias. Este método, como se comprenderá, sólo es aplicable en los países en que una clase arrebató a otra clase el poder, por la fuerza revolucionaria, o en los países nuevos. En cambio, en los demás países las modificaciones que se han producido en el régimen de la propiedad lo han sido bajo la influencia de las nuevas condiciones económicas y sociales.

Hay un informe muy interesante del director general honorario de la Caja Nacional de Cré-

dito Agrícola de París, M. Louis Tardy, publicado por la Sociedad de las Naciones, sobre los sistemas de crédito agrícola. El establece que en la mayor parte de los países, los pequeños y medianos propietarios tendían a ser más numerosos; esta evolución es debida a las condiciones económicas, sin estímulo particular, en Suiza, y en Bélgica, en los Países Bajos y en Francia, después de un siglo.

En otros casos ha sido la intervención de los gobiernos, dando facilidades de crédito a los trabajadores agrícolas, que llenaban ciertas condiciones, para permitirles la adquisición de una explotación que podían cultivar por sí mismos.

Dinamarca ha sido una de las primeras en intervenir en ese sentido para la constitución de los bienes de *Husmaend*. Inglaterra misma ha buscado de crear los *allotments* y los *Small Holdings* y devolver a los terratenientes irlandeses propietarios de sus pequeños dominios. Francia ha previsto los préstamos a largo plazo y a tasas reducidas para aumentar el número de pequeños propietarios, con condiciones especiales para los mutilados de la guerra.

Alemania, antes de la guerra, había, por razones diversas, creado los *Rentengüter* y hecho la colonización interna.

Sr. Palacios. — Hago indicación de pasar a un breve cuarto intermedio.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (González Iramain). — Invito al Senado a pasar a un breve cuarto intermedio.

—Así se hace, siendo las 13 y 45.

—Instantes después, vuelven a sus asientos los señores senadores.

Sr. Presidente (González Iramain). — Continúa la sesión y con la palabra el señor senador por Córdoba, doctor Martínez.

Sr. Martínez. — Bien, señor presidente.

Al pasar a cuarto intermedio expresaba que esta idea noble de la colonización podía fracasar en su ejecución por cuanto las medidas destinadas para ponerla en movimiento eran insuficientes; que si bien el organismo encargado por la ley de aplicarla iba a contar con las tierras fiscales, a pesar de la extensión de éstas, las propiamente utilizables para los fines de la ley y que están especificadas en el artículo 9º del despacho, no pasaban de una cantidad muy pequeña: 1.600.000 hectáreas; que la tierra en

poder de los bancos oficiales y de las instituciones autárquicas tenía que ser pagada, como también tenía que serlo la tierra que se expropiara a los particulares, cualesquiera fueran las medidas establecidas para obtenerlas al menor precio posible, en virtud de los conceptos sociales que informan este proyecto.

Cuando me referí al Banco de la Nación, hice presente que la política de colonización de esta institución, que había dado, a mi juicio, muy buenos resultados y que, sin embargo, había sido tildada de insuficiente, insumió la cantidad de 65.000.000 de pesos en préstamos para adquisición de inmuebles y 200.000.000 de pesos más para los otros fines de la ley de crédito agrario. Entonces, ¿qué transformación substancial podría esperarse de una ley que en realidad sólo destinaba 100.000.000 de pesos para adquirir tierras, que es lo que determina prácticamente el artículo 61, en el inciso a)??: 30.000.000 de pesos que debía entregar de inmediato y 70.000.000 escalonados en cuotas de 10.000.000 de pesos.

Es cierto que había otros recursos concurrentes, como el del inciso c), del producido de la venta y arrendamiento de las tierras regidas por la presente ley; el del inciso d), de los fondos que se recauden en virtud de lo dispuesto por las leyes números 4.167, 5.559 y 6.712 y en el inciso e), el producido de las comisiones, de los intereses punitivos, derechos de inspección, etcétera, que fije el consejo, y de los legados, donaciones, etcétera, que se le hagan.

Es cierto también, señor presidente, que parte de los fondos empleados tienen que ser recuperados con el tiempo, pero esa recuperación, que se hace en un plazo sumamente largo, reduce las posibilidades materiales, sobre todo al comienzo de la ejecución de la ley, a límites muy precisos. Podría argumentarse también, que fuera de los 100.000.000 de pesos y de los otros recursos, el consejo, en virtud del artículo 30, que dice que cuando el saldo amortizado, más el monto acumulado en el fondo de ahorro, alcance al 50 % del precio de venta del predio, el consejo solicitará la transferencia de su crédito al Banco Hipotecario Nacional, recibiendo cédulas hipotecarias por su valor nominal. Desde luego que con estas cédulas podrá contar con nuevos recursos y conceder entonces nuevos préstamos, pero, en la forma en que está redactado el artículo, es optativo, por el Banco Hipotecario Nacional, el aceptar o no la transferencia.

De manera que es, por lo tanto, un recurso eventual con que debe contar el consejo. Es claro que en esta materia es difícil hacer cálculos,

pero si suponemos, por ejemplo, para hacer en una forma esquemática este asunto, que una hectárea de las que se tenga necesidad de comprar o expropiar para el cumplimiento de esta ley, y por tratarse de hectáreas en zonas convenientes para la colonización, valga 200 pesos, que no es exagerado estimar, ya que el señor senador por Entre Ríos nos ha dado las cifras promedio de las colonizaciones oficiales de las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos, que superan en mucho a esta cantidad, tendríamos que el costo de una parcela de un lote de 100 hectáreas sería de 20.000 pesos. Para 10.000 parcelas —nada más— se requerirían 200.000.000 de pesos. Y 10.000 parcelas, ¿qué población puede radicar sino a razón de cinco, seis o siete personas por parcela? Es decir, que con 200 millones de pesos, habríamos radicado de 50 a 60.000 personas. Habríamos transformado solamente 10.000 arrendatarios en 10.000 propietarios.

Yo encuentro, en este sentido, señor presidente, una desproporción muy grande entre la noble inspiración de este proyecto y la materialidad de los recursos que se le asignan para realizarla. Paso ahora a ocuparme de la expropiación.

Nadie va a pensar que yo sea un revolucionario. Pertenezco a la clase capitalista argentina, pero tengo conceptos sociales arraigados. Yo no veo un peligro en algunas de las disposiciones que tiene la ley; creo que los propietarios de tierras que no se explotan, deben de ser castigados y lamento profundamente, desde un punto de vista económico, la reforma realizada hace 22 años, justamente, del Código de Minería argentino, la obra magnífica del doctor Enrique Rodríguez, fundada sobre el pueblo, vale decir que daba la propiedad de las minas al que las descubría y a los que las trabajaban, para transformar luego ese sistema por el de canon, que ha permitido el acaparamiento minero y que conspira contra el florecimiento de esta industria.

Nosotros, en la plataforma política de nuestro partido, en Córdoba, creo que el año 1923, ya establecimos en el segundo punto, lo siguiente: «Mantener los principios que definen la organización fundamental de la familia y el régimen de la propiedad individual con las limitaciones que exige el interés social». La propiedad limitada por el interés social.

Pero cualesquiera que sean los puntos de vista personales que se tengan, no puedo dejar de reconocer que el sistema de expropiación establecido en la ley ofrece grandes peligros, disimula-

dos bajo el noble manto de una simpática iniciativa de carácter social. Al establecer que el precio de la tierra que se expropie en cumplimiento de esta ley se fijará con las siguientes normas: «a) Al valor de valuación para el pago de los impuestos», y «b) Y al valor de su producción, apreciada en los diez años precedentes al de la expropiación, dentro de la zona en que se halla ubicado», establece un concepto que no sé hasta qué punto lo va a aceptar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, atento a las claras disposiciones constitucionales en materia de expropiación e indemnización. Se presta, además, para que la pasión política pueda ejercerse, a objeto de favorecer al amigo con aumentos de la tasa de contribuciones de las tierras que van a ser expropiadas y para que pueda, también, artificiosamente, rebajarse esa misma tasa a los enemigos, con el fin de obtener esa tierra a un precio menor del que realmente le corresponde.

Los sistemas de expropiación que fijan el pago del impuesto para la valuación de las tierras, establecen otras normas complementarias que permiten asegurar la justicia con que se haya de proceder en la materia.

Yo no tendría ningún reparo que hacer a las otras disposiciones que establecen un régimen especial de la propiedad adquirida para estos fines, porque, como muy bien lo ha dicho el miembro informante de la comisión en la Cámara de Diputados, doctor Benjamín Palacio: «La comisión, con las normas que estatuye en su despacho, que tienen como directivas básicas colonizar al país, dando acceso a la tierra a los que por distintos motivos no pueden llegar a ella y al mismo tiempo acelerar su proceso demográfico, no pretende derogar los principios de nuestra legislación civil, relativos al régimen de la propiedad rural. Tampoco tiene el propósito de crear para ésta, en general, otras restricciones y límites que los que tiene actualmente por nuestro Código Civil. Pero sí está en su firme decisión, que las tierras que serán materia de esta ley de colonización en las distintas formas que lo prevé y proyecta, caigan dentro del régimen de excepción que para ellas crea en lo que se refiere a su adquisición, expropiación, pago, transferencia, inembargabilidad, rescisión de contrato, arriendos, etcétera. Los principios que dejo expuestos así lo exigen.»

—Ocupa la Presidencia el presidente provisional del Senado, doctor Robustiano Patrón Costas.

No hay institución jurídica en que sea más visible el conflicto entre el interés público y el

privado que en materia de expropiación. Es evidente que, según sea el concepto de la propiedad, la expropiación tendrá mayor o menor amplitud. No es el caso de hacer una disquisición sobre la evolución del concepto de propiedad. Ya se han hecho magníficas exposiciones en esta materia, principalmente por nuestro distinguido colega, el señor senador por la Capital. Basta recordar que en Roma se originó con un carácter esencialmente social para tornarse en individualista, lo que se refleja en las frases *mancipio*, *dominio*, *propietas*, que viene a significar propiedad de la sociedad, de la familia y del Estado. La época bárbara señala un carácter menos individualista en la propiedad. Más tarde, los padres de la Iglesia, al introducir en el mundo el concepto de la humanidad, al elevar la consideración del hombre y considerar a todos los seres iguales como hijos de un mismo padre, han debido elevar este concepto del derecho de propiedad, dándole un carácter más social, suavizando así el individualismo romano.

Este concepto se confirma en *Las Partidas*. Una de ellas define la propiedad como «el poder que pme a en sus cosas de facer de ellas o en ellas lo que quisiere, según Dios o según fuero». Según fuero, vale decir, según las restricciones que la ley impone a los particulares en beneficio común.

La Revolución Francesa fué esencialmente individualista, pero nuestro Código Civil, que ha bebido en su fuente, no lo ha sido tanto. Es cierto que el codificador tenía que ser fiel a las ideas de la época en que elaboró su estupenda construcción, pero adelantándose a la misma, introdujo conceptos sociales que hoy, después de 70 años, tienen todavía una gran amplitud.

El señor senador Palacios ha criticado al doctor Vélez Sarsfield, refiriéndose al artículo 2.513 del Código Civil que dice: «Es inherente a la propiedad el derecho de poseer la cosa, de disponer o servirse de ella, de usarla y gozarla según la voluntad del propietario; él puede desnaturalizarla, degradarla o destruirla».

Antes que él, el profesor Duguit, de la Universidad de París, en su ciclo de conferencias, también había criticado a Vélez Sarsfield, atribuyéndole un excesivo carácter individualista al Código Civil.

Sr. Palacios. — Permítame una breve interrupción, señor senador.

Sr. Martínez. — ¡Cómo no!

Sr. Palacios. — Yo tengo un gran respeto por el sabio cordobés, autor del Código Civil, que conceptúo un verdadero monumento legislativo.

Pero entiendo que la ley es simplemente una cristalización de normas, en tanto que la vida, que avanza con ritmo acelerado, va modificando los conceptos jurídicos, que parecían incommovibles y absolutos. Por eso el Código Civil, no obstante la sabiduría del autor, ha envejecido. El derecho, señor senador, es como Saturno: devora sus propios hijos.

Sr. Martínez. — Me complace mucho la opinión del señor senador; pero no deseo que quede en el ambiente la impresión sobre el exagerado individualismo del doctor Vélez Sarsfield, sobre todo, considerando el momento en que realizó su obra, hace más de 70 años.

El profesor Lafaille, refiriéndose a los derechos reales, dice: «Se dice con frecuencia que el concepto de la propiedad que sustenta nuestro código, deriva del derecho romano, y se habla e insiste del espíritu individualista de los romanos. Evidentemente, el derecho de propiedad de los romanos era más amplio que el que predominó en las últimas legislaciones, pero está lejos de tener el individualismo estrecho y absoluto que figura en el Código Civil».

El propio doctor Martínez Paz, comentarista de Vélez Sarsfield, se manifiesta en el mismo sentido. Con motivo de un homenaje al doctor Vélez Sarsfield, se publicó en Córdoba una serie de trabajos sobre el Código Civil. En uno de ellos, el ilustrado rector de la universidad y ex profesor mío de derecho civil, el doctor Sofanor Novillo Corvalán, hace la defensa del doctor Vélez Sarsfield, demostrando cómo, fuera de la definición de la propiedad que establece el artículo 2.513, existen una serie de restricciones a ese poder absoluto, que transforman por completo el concepto anterior.

Así, por ejemplo, y para no fatigar la atención del Honorable Senado, citaré el artículo 2.639, sobre propiedades limítrofes de ríos y canales, que tiene, no una restricción, sino una verdadera confiscación. El mismo artículo 2.511, sobre expropiación; el 2.503, que no permite el desmembramiento del dominio; el 3.068, sobre servidumbres legales; el 2.611, sobre restricciones impuestas al dominio privado por el interés público, que se rigen por el derecho administrativo, amplio cauce por el cual se pueden canalizar todas las corrientes que se refieran a la transformación de este derecho.

Y la prueba de que el propietario argentino está sometido a una serie de limitaciones la tenemos, entre otras cosas, en las leyes sanitarias y de orden público, que lo colocan en la misma situación a que se refirió el propietario

romano en la cita de Aulo-Gelio, que con tanta elocuencia nos hizo el señor senador por la Capital.

Como el tiempo apremia y no quiero seguir distrayendo la atención del Senado, se me ha de permitir que intercale en este punto de mi exposición, parte del trabajo del doctor Novillo Corvalán, sobre el dominio en el Código Civil y la verdad de su doctrina, en que compara nuestro código con los dos más modernos en el momento en que se elaboró este artículo, el helvético, considerada la más alta manifestación del derecho democrático, y el brasileño. En ambos, el concepto de la propiedad no tiene diferencia substancial con la del código nuestro.

—El trabajo a que alude el orador es el siguiente:

«El dominio en el Código Civil. Hacia la verdad en la doctrina.»

«Para una solución satisfactoria e integral del problema, es forzoso plantearlo en estos términos: 1º — ¿El individualismo del dominio, que provendría de los textos transcritos, es de tal modo absoluto y rígido que no hay en el código mismo limitaciones expresas y limitaciones posibles al derecho del propietario que lo hagan ceder su dominio en algunos casos, restringirle su ejercicio en otros, y en otros condicionar su uso en miras del interés público?; 2º — ¿Los códigos contemporáneos, de tipo no individualista, definen el dominio de modo menos rígido que el nuestro y conceden a su titular derechos menos amplios, o lo han legislado de un modo encaminado hacia un ejercicio social?; y 3º — Cuando el dominio no sufre limitaciones por no exigir las el interés social, ¿no debe conservar el titular la plenitud de los poderes jurídicos y materiales que emergen naturalmente de su derecho?

«El código helvético se expresa sobre el dominio en estos términos: «el propietario de una cosa tiene el derecho de disponer libremente de ella en los límites de la ley (artículo 41). de lo cual se desprenden dos observaciones: que, siguiendo la norma de los códigos modernos, huye de la definición, enemigo menos peligroso de lo que el aforismo romano, repetido por nuestro propio codificador, lo cree. Siempre he pensado que la definición en los códigos, que no es desde luego la científica, ni la filosófica, fija simplemente los límites de la institución o el derecho definidos y que debe fijarlos siempre porque su función es *normativa* de la regulación de los intereses individuales y sociales.

«La otra observación que dicho artículo sugiere es que no traduce una doctrina distinta del nuestro, sino exactamente la misma, dentro de una mejor técnica.

«Parecería, sin embargo, que, puestos frente a frente ambos preceptos legales, el argentino señala al propietario como límite de su derecho su voluntad, vale decir, lo ilimitado, mientras el suizo le señala el límite de la ley, pero en realidad sólo tienen puntos de partida distintos. El nuestro comienza por las facultades que confiere el dominio a su titular, pero en definitiva le fija fronteras legales no sólo cuando supprime o restringe esas facultades en los numerosos preceptos legales que he recordado, sino sobre todo cuando el artículo 2.611 autoriza a que el derecho administrativo fije a la voluntad del propietario todas las fronteras que el interés público aconseje.

«El código suizo no parte del derecho del propietario, sino del límite legal de ese derecho, diciéndole, empero, que cuando ese límite no exista, puede «disponer libremente de la cosa», de modo que, en definitiva, ambos códigos coinciden en los elementos que esencialmente debe tener la propiedad: la libre disposición de la cosa cuando falta un límite legal; la supresión o restricción de la libertad cuando éste existe y la fijación de un límite cuando el interés social lo aconseje.

«El código suizo, por lo demás, no contiene ningún precepto que imponga al titular del dominio un ejercicio social de su derecho y las limitaciones legales no son superiores a las que fija nuestro código.

«Y es preciso no olvidar que estamos en presencia de un código moderno, democrático, con lo cual se significa que está nutrido de un profundo sentido social.

«El brasileño, por su parte, sólo se limita a huir de la definición cuando legisla sobre el dominio, pero adelanta menos que el helvético, sobre la función social de este derecho, si hemos de hablar con arreglo a la avanzada concepción de Duguit. Dice, en efecto, su artículo 524 que «la ley asegura al propietario el derecho de usar, gozar y disponer de sus bienes y de recobrarlos del poder de quien injustamente los posea». No señala límites a esas facultades de uso, goce y disposición, de modo que están regidos por la voluntad del hombre y, en consecuencia, este código refleja la misma doctrina del argentino, con el agregado de que el brasileño empieza por destacar la función tutelar del Estado, la protección legal al titular de ese derecho, cosa que no ocurre cuando legisla sobre otros dere-

chos. Ni siquiera agrega el código brasileño que cuando el uso, goce y disposición del propietario sean contrarios a la utilidad social serán suprimidos o restringidos. Y nada contiene tampoco sobre deberes del propietario en el sentido de que debe usar de su derecho de un modo adecuado a las necesidades sociales.

«He omitido la mención del código soviético porque estructurada la sociedad política rusa bajo un régimen comunista, el punto de partida del Código Civil es la propiedad colectiva, no la individual, pero ocurre, sin embargo, que dentro de ese tipo de códigos, la función de uso y goce de las cosas, el usufructo, que en general es lo que les está concedido a los habitantes sobre algunos dominios (no faltan algunas propiedades particulares), es con fines individuales. Algunos decretos anteriores a la codificación señalaban la necesidad de un uso destinado al mayor bienestar público.»

Y el doctor Abel Cháneton, en su obra sobre Vélez Sársfield, refiriéndose al Código Civil, destaca su carácter colonizador con estas palabras:

«El más urgente problema de gobierno era entonces —y continúa siéndolo hoy— poblar el territorio». «El mal que aqueja a la República Argentina es la extensión», decía Sarmiento. Era, pues, necesario atraer el excedente de la población europea para fijarla, enraizarla en nuestro suelo, procurándole todas las ventajas del bienestar. En esa necesidad se inspiraban por igual los preceptos constitucionales, dictados «para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino», las franquicias económicas del gobierno de Paraná, y la liberal legislación mercantil de Buenos Aires, proyectada, y en buena parte realizada por el propio Vélez Sársfield. El Código Civil no traicionaría esos propósitos. Es el nuestro un código destinado a favorecer la población, la colonización y la civilización del territorio». Un «código colonizador», en una palabra.

«Puesto a traducir en preceptos legislativos esas aspiraciones, el codificador encuentra en el liberalismo económico de su predilección, los principios a los cuales debía ajustarse. Todo lo que importara una traba a la libre circulación de la riqueza en su forma inmobiliaria o mueble; cuanto tendiera a inmovilizar la propiedad o los derechos creditorios, es proscripto de la ley. La igualdad en la partición hereditaria, el sistema de las legítimas, la liberación del suelo mediante la extinción de mayorazgos, censos enfiteúticos y capellanías, la limitación de los arrendamientos, lo demuestran de modo concluyente. El trabajo es estimulado con el

reconocimiento de un derecho de dominio pleno sobre las cosas, sacrificando a ese estímulo cualquier consideración de otro orden. Al mismo propósito económico obedecen la supresión de las hipotecas tácitas y ocultas; la resistencia a admitir la interdicción del pródigo; la libertad dejada a los contratantes para convenir intereses, aun usurarios, y el establecimiento de la comunidad como régimen legal ordinario en las relaciones matrimoniales. Una serie de normas concretas, muchas veces citadas por los tratadistas, traducen esa preocupación asidua. Resultan característicos en ese sentido los artículos siguientes: 58, 621, 1.278, 1.364, 1.505, 2.502, 2.510, 2.511, 2.612, 2.613, 2.614, 2.828, 2.921, 2.929, 2.969, 3.010, 3.017, 3.115, 3.197, 3.565, 3.591, 3.723, 3.724, 3.731, 3.732, 3.781, y las notas de muchos de ellos. A los que pueden agregarse todos los que menciona Colmo, como protectores de intereses de terceros. Y aun así completada, la lista no agota la materia».

Bien, señor presidente. Yo tendría muchas cosas que agregar; pero lo avanzado de la hora, la profundidad con que se ha analizado esta ley por los otros oradores que me han precedido en el uso de la palabra y el deseo de evitar sus imperfecciones para que pueda convertirse en una realidad, me determinan a no seguir en el curso de mi exposición.

Recapitularía, diciendo: que hubiera sido preferible, a mi entender, aumentar las disponibilidades del Banco de la Nación para adecuar su política de crédito agrario; que es también fundamental un estudio de las regiones agrícolas del país para asentar un proyecto de colonización sobre bases definitivas; que considero insuficientes los recursos con que se dota al instituto colonizador para realizar sus fines; que el sistema de las expropiaciones en una forma global en todo el país ofrece sus peligros y que más perfecto hubiera sido hacer un estudio por las oficinas correspondientes o los encargados de aplicar la ley, en un proyecto concreto sobre expropiaciones determinadas; pero, a pesar de todo, como un ensayo sobre el cual no finco muchas esperanzas por la limitación de recursos, no puedo dejar de reconocer que está patrióticamente inspirado, que debemos darle nuestro consentimiento, para que de esta forma, y progresivamente, pueda transformarse el agro argentino, convirtiendo al arrendatario y habitantes del mismo en propietarios del rico suelo de la patria.

Nada más. (Aplausos.)

Sr. Landaburu. — Pido la palabra.

Tengo que deplorar nuevamente, señor presidente, hablar en ausencia del señor ministro

Julio 18 de 1940

CAMARA DE SENADORES

17ª Reunión. 13ª Sesión Ordinaria

de Agricultura y corriendo el riesgo de molestar demasiado la atención de mis distinguidos colegas, pero creo que haciéndolo en este instante contribuyo a aprovechar del mejor modo posible este final de sesión, y a propender que nuestro despacho pueda votarse, acaso en general, en la sesión de mañana.

Necesito ocupar por algunos instantes, y procuraré ser lo más breve posible, la atención del Senado, para hacerme cargo de las objeciones de carácter general que ha merecido nuestro despacho y para recoger las sugerencias que se nos han dirigido en el sentido de modificarlo en determinados capítulos

Algunas de éstas corresponden a la discusión en particular, pero como se han hecho en el curso del debate general, las recogeré ahora mismo y las dejaré contestadas, evitando en lo posible una discusión dispersa que conspire contra la unidad y la continencia del asunto.

La comisión agradece, desde luego, a los señores senadores esta forma de colaboración que le ofrecen, tanto más cuanto que ella se ha dirigido desde el primer momento a todos y cada uno de los distinguidos colegas, solicitándoles por nota que se sirvieran hacerle llegar todas las objeciones que mereciera la sanción de la Cámara de Diputados y las que consideraran útiles para mejorar el futuro despacho.

Los señores senadores han preferido hacerlo en este instante en el recinto mismo y no por eso la comisión dejará de tomar en consideración y contemplar, hasta donde sea posible, esas observaciones.

Desde luego, las impugnaciones de carácter general se han hecho de diversos ángulos, y es así que el señor senador por Santa Fe, doctor Caballero, impugna el capítulo de la expropiación y preconiza lo que podríamos llamar el mantenimiento del régimen de la gran propiedad, mientras que los señores senadores por la Capital, doctor Palacios, y por Entre Ríos, doctor Laurencena, son partidarios de la expropiación y son adversarios, como nosotros, del latifundio.

A su vez, ellos no coinciden, porque, mientras el primero sostiene la conveniencia de fundar la colonización sobre la base de entregar la tierra en propiedad a los agricultores y subsidiariamente en enfiteusis, el segundo sustenta principalmente el sistema del arrendamiento, por lo menos durante un período de prueba como precursor de la venta de las tierras.

Quiere decir, entonces, que esas objeciones, lejos de ser contestes, son dispares, y en algunos casos, antitéticas, y lejos de debilitar el despacho, contribuyen a refirmarlo, porque dan la

impresión cabal de la falta de unidad de esas observaciones.

A su vez, el señor senador por Córdoba, doctor Martínez, que acaba de producir un elocuente discurso, expresa su adhesión en general a nuestro despacho, con las salvedades y reparos que ha formulado a los capítulos de la expropiación y de la exigüidad de los recursos, que han de motivar de la comisión algunas consideraciones, sobre todo en la discusión en particular, y en el momento en que debamos referirnos concretamente a esos aspectos del asunto.

Veamos las objeciones. El señor senador por Santa Fe empezaba diciendo que este despacho tiende a entregar la tierra colonizable argentina a las masas extranjeras o extranjerizantes, que no han sido todavía debidamente absorbidas por la corriente nacional, y que eso entrañaba, en consecuencia, un peligro para el sentimiento de argentinidad. Son, más o menos, sus palabras textuales.

Y bien, señor presidente: esas afirmaciones del señor senador por Santa Fe, si no totalmente infundadas, son, cuando menos, visiblemente exageradas. Baste recordar que el despacho, en su artículo 4º, exige, para ser miembro del Consejo Agrario Nacional, la ciudadanía argentina, y baste recordar igualmente, que el artículo 27, refiriéndose a los motivos de preferencia en la venta de las parcelas, admite como la primera de ellas, la que se funda también en la condición de ciudadano nativo argentino, y siendo extranjero, en la situación que se crea después de cinco años de residencia en el país.

Quiere decir, entonces, como dije al informar en general, que esta ley se inspira en una corriente franca y sanamente nacionalista, sin llegar a la xenofobia, que no podemos sentir, siendo, como somos, un país de inmigración de hombres y de capitales.

Si a pesar de esto, determinado precepto del despacho, fuera susceptible de ser reformado en el sentido de acentuar esa tendencia nacionalista, la comisión está dispuesta a contemplar las objeciones que se hagan y dar su asentimiento en ese sentido y dentro de esas limitaciones.

El señor senador por Santa Fe objetaba directamente el capítulo relativo a la expropiación.

Yo me voy a referir a ese aspecto del asunto, más que por el deseo de polemizar con el señor senador por Santa Fe, por la necesidad y el deber de tratar esa cuestión, porque la dejé en blanco al informar en general, y constituye, sin embargo, uno de los aspectos fundamentales de este proyecto de colonización. Al informar en general recordé, como lo han hecho después los señores senadores por la Capital, doctor Pa-

lacios, y por Córdoba, doctor Martínez, la evolución del concepto del derecho de dominio, y ya sea que nuestro Código Civil sea más amplio o más estricto que los conceptos originarios de la legislación romana, que fué indudablemente su fuente, lo indudable es que él se mantiene todavía visiblemente dentro de las características de individualismo, absolutismo y de perpetuidad con que fué sancionado originariamente, no obstante las oportunas salvedades que acaba de hacer el señor senador por Córdoba en su discurso.

Precisamente, fué en la ciudad de Córdoba, en el Congreso Universitario de 1929, donde se votó, como tuve oportunidad de recordarlo, una proposición tendente a derogar el artículo 2.510 del Código Civil, que establece la perpetuidad del dominio, no obstante la falta de ejercicio de ese derecho. Y fué en la misma ciudad de Córdoba, dos años después, que el Congreso Nacional de Derecho Civil, por iniciativa del profesor Lafaille, sancionó una proposición similar.

En Méjico existe la ley llamada de «tierras ociosas», en virtud de la cual cualquier individuo puede denunciar las que se hallan en ese estado y solicitar el derecho de explotárlas en determinadas condiciones en ausencia del propietario.

Estas ideas no son nuevas entre nosotros, aplicadas a los problemas de colonización. Ya las enunciaba Sarmiento, ministro de Mitre, en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en su mensaje del 20 de agosto de 1860. «Es que la tierra —dice Martín y Herrera recordando este hecho— bien situada, se encuentra en manos de acaudalados propietarios, y si es fácil aun comprarla barata en grandes extensiones, no lo es para el inmigrante adquirir pequeños lotes de terrenos de labor sino adaptados a las vías de comunicación y centros económicos. Sólo por leguas puede adquirirse la tierra a condición de tener un capital ingente para poblarla de ganado; es decir, que para enriquecerse es preciso ser primero rico». Y después proponía concretamente el procedimiento de la expropiación en la sanción de la ley que recomendaba a la Legislatura de Buenos Aires.

Nosotros tenemos en nuestro país numerosas leyes e iniciativas parlamentarias que representan el nuevo movimiento de ideas y la tendencia constante a sacar el derecho de dominio de esos cauces estrechos y rendir un tributo cada vez más amplio a las exigencias de la colectividad o al bien entendido interés social.

Tenemos las leyes de alquileres números 11.156 y 11.157, muy discutida en su hora y cuya constitucionalidad fué puesta en tela de juicio, no obstante lo cual la Corte Suprema de Justicia las declaró perfectamente compatibles con las prescripciones, derechos y garantías de nuestra Carta Fundamental. Tenemos la ley de arrendamientos agrarios, número 11.170, que se refiere precisamente a los problemas de la tierra y de la agricultura. Introdujo una visible limitación a la libertad de contratar y al derecho de dominio, estableciendo el plazo presunto en contra de la voluntad del locador para evitar los abusos que éste cometía, a menudo, contra los ocupantes de la tierra.

Todavía puedo citar entre nosotros, expresiones más antiguas que tendían a reivindicar ya estas ideas y hacerlas prevalecer en la solución de los problemas vinculados a la tierra pública y a su colonización.

Andrés Lamas, en su conocida obra *Rivadavia y la legislación de las tierras públicas*, exponiendo las ideas de aquel eminente argentino, y haciendo referencia, precisamente, al estado de la legislación a principios del siglo pasado, decía lo siguiente: «Esa legislación tenía por base la apropiación individual de la tierra; y para obtener esa apropiación necesitaban los individuos, o el favor de los gobiernos, que sólo se dispensa a limitado número, o la posesión del dinero no sólo necesario para pagar el precio a que el gobierno vendía la tierra, sino para tramitar las solicitudes que se debían hacer para conseguir la concesión, que sólo se alcanzaba por los que estaban en la gracia oficial y mediante dispendiosas diligencias. En consecuencia, la tierra, que es propiedad natural de todos, estaba destinada a ser la propiedad individual, y a perpetuidad, de unos pocos favorecidos de la fortuna.

«El resto quedaba desheredado: y este desheredamiento, que los condenaba a la dependencia de los grandes propietarios de la tierra, los abatía socialmente y los sometía a su codicia, con escándalo de la razón, como decía Rivadavia.»

El ingeniero Marotta en su libro *Tierra y Patria*, que contiene estudios muy interesantes en esta materia, bajo el título «Expropiación y latifundio», dice en la página 119: «Las críticas y resistencias, más o menos enconadas, que ha provocado la inclusión de esta facultad de expropiar en el proyecto del Poder Ejecutivo —se refería al Poder Ejecutivo de 1903— no se justifican, en realidad, si se reflexiona que no se trata de un concepto nuevo e improvisado,

porque viene siendo propuesto sistemáticamente en el país desde hace muchos años, por ministros, legisladores y gobiernos de provincia, como una prueba de que responde a una necesidad nacional y concreta de un pensamiento de gobierno de imperiosa realización».

Y en seguida citaba las siguientes palabras del ministro Escalante, que colocado frente al problema del latifundio y avisorando las soluciones más acertadas, decía: «¿Qué hacer, entonces? No hay más remedio que expropiarle siquiera una décima parte de la superficie. Podrá decirse que es imposible, que su interés particular no lo determine a vender si ha de obtener grandes ganancias con ello. Así parece teóricamente, pero los hechos demuestran lo contrario: millonarios, merced a la valorización debida al adelanto social, no les interesa mayormente aumentar sus millones, que no les darán más comodidad y lujo que los que gozan. Tiene, por otra parte, la seguridad de que el progreso social, por el trabajo de los otros, ha de darle en el porvenir los millones de ganancia de que momentáneamente no se preocupa; prefiere, por otra parte, el placer hereditario del latifundio, y no goza con el espectáculo de numerosas familias honestas y laboriosas disfrutando la pequeña propiedad, labrando el bienestar de su hogar, el porvenir de sus hijos y la grandeza de la patria».

La expropiación fué incorporada ya a la Declaración de los Derechos del Hombre y del ciudadano en Francia en el año 1789, siempre que se fundara en razones de *necesidad pública*. Posteriormente, se incorporó también al Código de Napoleón, substituyendo el concepto de *necesidad* por el de *utilidad*, que es mucho más amplio, y con el cual se ha incluido en las soluciones constitucionales que rigen el destino de casi todos los países civilizados del mundo, inclusive el artículo 17 de la Constitución argentina.

La expropiación procede de acuerdo con la cláusula constitucional, siempre que el Congreso califique la utilidad pública que la determina, y que sea previamente indemnizada.

Yo no quiero hacer una disquisición sobre el aspecto constitucional de este punto. Diré lo indispensable para dejar informado en esa parte el despacho de la comisión.

La facultad del Congreso para calificar la utilidad pública que funda la expropiación es amplia; raya en lo discrecional. No puede ser limitada ni moderada por ningún otro poder, salvo el caso en que evidentemente esa expropiación respondiera al propósito de satisfacer

un interés meramente personal o individual tan limitado como aquel interés que ataca la expropiación.

En ese sentido se ha mantenido la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ya en los primeros tiempos, en los fallos del 18 de junio de 1867, causa Fisco versus Hué, y 13 de agosto de 1868, causa Fisco versus Señorans y Rosas, que se refieren precisamente a la aplicación de las leyes de 1855 y 1863, relativas a la expropiación de una legua de tierra a cada lado de la vía del Ferrocarril Central Argentino, con propósitos similares, de población y de colonización de las tierras, en esos casos, la corte declaró que la facultad del Congreso para calificar la utilidad pública era amplia y que esas leyes eran perfectamente constitucionales.

Sr. Caballero. — Permitame, señor senador, una interrupción. Lo hago con mucho sentimiento porque lo escucho con placer y no quiero desviarlo de su exposición.

No hay ley más contraria al sentimiento de la argentinidad que la que entregó 80 leguas a cada lado de la vía del Ferrocarril Central Argentino a dicha empresa. Esas no eran tierras desiertas; eran tierras pobladas por la gente que había hecho el país. Esa ley que expropió las tierras estableciendo que las leguas valían 200 pesos, cuyo importe debía venir a cobrarse a Buenos Aires. En toda la zona que va de Rosario a Córdoba, la población argentina pasó al estado de proletarización, del que no pudo salir, porque no tuvo ni siquiera el amparo del gobierno, debido al progreso indudable que significaba para el país la construcción de esas vías.

El general Urquiza y los gobiernos de origen federal se opusieron invariablemente a entregar la tierra a las empresas. Fué el gobierno del general Mitre, en una sesión que los señores senadores pueden leer, el que hizo esa entrega. Se discutió aquí, en el Congreso, y la discusión ocupa sólo media página del Diario de Sesiones. Uno de los senadores de aquel entonces, preguntó de quiénes eran esas tierras y entonces, el miembro informante, o el señor Rawson —no recuerdo bien—, dijo que esas tierras debían ser fiscales; sin embargo, allí estaba toda la propiedad particular, desde Rosario a Córdoba.

Algún día hemos de hacer el estudio más a fondo de este asunto y discúlpeme el señor senador por lo extenso que he sido en esta interrupción que tan gentilmente me ha concedido.

Sr. Landaburu. — He escuchado muy complacido el recuerdo histórico que trae a colación el señor senador, pero voy a tener oportunidad de citar otras leyes y otros casos de jurisprudencia posterior y otros debates más amplios producidos en este recinto, en los que ha prevalecido totalmente el concepto de atribuir al Congreso la facultad de calificar la utilidad pública.

Tenemos —yo que me he referido a leyes anteriores que acepten la expropiación— la ley Mitre, número 5.315, que autoriza la expropiación de las líneas de capital privado por el monto de la cuenta Capital aprobada por el gobierno, más un beneficio del 20 %. Tenemos la ley más reciente número 12.311, creando la Corporación de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires, en cuyo debate tuve oportunidad de intervenir que autoriza la expropiación de las empresas que no se allanasen a refundirse en la nueva entidad o a las cuales no alcancen los beneficios del régimen autónomo.

Esa jurisprudencia de la corte a que antes me he referido, orientada en el sentido de reconocer al Congreso, con la mayor amplitud, la facultad para calificar la utilidad pública, sólo ha sufrido un retroceso o modificación importante; el fallo del 14 de abril de 1888, en el juicio seguido por la Municipalidad de la Capital contra la señora de Elortondo, relacionado con la expropiación de terrenos en la avenida de Mayo y de los sobrantes.

Pero la corte volvió después a su jurisprudencia originaria, que es la que se mantiene hoy constantemente. Volvió a ella en 1900, en el caso Casado versus Bombal, sobre concesión de tierras al Ferrocarril Oeste Santafecino y en 1909, en el caso Gibbs versus Provincia de Mendoza que se refiere a una materia distinta.

Dije que podía citar precedentes parlamentarios de debates más amplios en materia de colonización, en los cuales había prevalecido el criterio que sustenta este despacho. Quise aludir, señor presidente, a la discusión en las sesiones del 30 de junio y 1 y 3 de agosto de 1907, en el recinto del Senado, con motivo de la sanción de la ley que autorizaba la expropiación de la tierra para la plaza del Congreso, y demás terrenos circundantes, que se destinaban a obras complementarias. Ese debate se produjo a raíz del proyecto del Poder Ejecutivo suscripto por el ministro doctor Manuel Augusto Montes de Oca, con dictamen favorable de la Comisión de Negocios Constitucionales, que informó el doctor Joaquín V. González que, como solía hacerlo en casi todos los asuntos en que intervenía, agotó el debate en la forma más amplia y luminosa.

Ese debate constituye, a mi juicio, el esfuerzo mayor y más eficaz que se haya hecho en el Parlamento argentino para refirmar la facultad del Congreso en el sentido de calificar la utilidad pública de la expropiación, aun aplicada a casos como éste de las llamadas expropiaciones por zonas, es decir, que comprenden cosas, terrenos y materias que no son estrictamente necesarias para la construcción de la obra pública que motiva el proyecto o iniciativa correspondiente.

No quiero abundar en otros argumentos de índole constitucional. Me limitaré a decir que la expropiación como medio de adquirir tierras necesarias para realizar con éxito el plan de colonización, es algo que ya constituye una verdad conocida por casi todos los países civilizados del mundo. Son numerosos los precedentes de leyes que autorizan expropiaciones de tierras para ser destinadas a la colonización. Tenemos, además del proyecto del Poder Ejecutivo suscripto por el ministro Cárcano, que ha sido el antecedente inmediato de este despacho, los proyectos de los señores diputados Horne y Palacio, y el del ministro Le Breton en 1924. Lo han sancionado ya las leyes de la provincia de Buenos Aires, número 4.418 y la de la provincia de Entre Ríos, número 2.985.

Entre los países extranjeros puedo recordar la ley de Méjico de 11 de mayo de 1936, de Chile, número 4.496, de 1928, y la del Uruguay, de 1913.

Por lo demás, la expropiación que autoriza el despacho en sus artículos 12 a 14, es la de aquellas tierras que sean necesarias para complementar un plan de colonización, cuando se ha demostrado que las propiedades disponibles de la Nación y de las entidades autárquicas no son suficientes y se aplica sólo a aquellas tierras que son materia de un cultivo racional hecho por su propietario o que exceden de un área determinada, que permite calificarlas ya como verdadero latifundio.

En ese sentido, este despacho coincide fundamentalmente con el proyecto que recordaba ayer el señor senador por Entre Ríos, presentado en 1885 por el gobernador Racedo y su ministro, doctor Miguel Laurencena.

Según lo recordó el señor senador, por ese proyecto se dejaba al interesado la opción entre cultivar la tierra o ser pasible de expropiación, y eso es, esencialmente, lo que dispone el despacho, porque en esta ley la expropiación se aplica a aquellas tierras que no son cultivadas directamente por el propietario.

No creo, señor presidente, que sea necesario abundar en mayores consideraciones para dejar clara y perfectamente establecida la constitución

nalidad del recurso de expropiación, único medio de adquirir tierras para colonizar y la conveniencia de introducirlo como solución concreta en este despacho.

Me voy a referir ahora a otro capítulo esencial que ha motivado también algunas discrepancias. Este despacho, el proyecto del Poder Ejecutivo que le sirvió de antecedente, así como los presentados por varios diputados que estudiaron juntamente con él, reposan esencialmente sobre la base de colonizar las tierras que se entregan en propiedad y definitivamente al agricultor. Esa es una de sus orientaciones esenciales; cambiarla o modificarla sería cambiar o modificar el proyecto por otro distinto.

Al informar en general, cité numerosos autores y recordé precedentes de leyes extranjeras y argentinas, así como iniciativas que no llegaron a sancionarse, estableciendo contestemente que la colonización debía hacerse sobre esa base, de entregar la parcela en propiedad al agricultor como mejor medio de radicar el hombre a la tierra, no sólo en razón de su interés, sino en razón de sus sentimientos, que constituye a veces el factor de propulsión más importante en los hechos y en la conducta de los hombres.

Yo no quiero insistir demasiado sobre este aspecto del asunto, no obstante ser modular en el despacho, porque puedo afirmar, sin temor a ser rectificado, que ésa es la opinión dominante en todos los hombres versados en esta materia, a tal punto que constituyen verdaderas excepciones los que, como el señor senador por Entre Ríos, de su jerarquía mental y su versación en esta clase de cuestiones, propician preferentemente el sistema de arrendamiento.

Pero no son tampoco ideas nuevas ni originales. Martín y Herrera, en su curso de economía política, refiriéndose a la explotación del suelo y a los diversos sistemas del cultivo de la tierra, por el propietario, por aparcería o por arrendamiento, dice: «El cultivo por el propietario es, sin duda, preferible a los otros sistemas. El propietario que administra su hacienda, dice Hervé-Bazin, pone mayor cuidado, ahorra más, mira por el porvenir y saca partido de todos los elementos. En segundo lugar incorpora al suelo los capitales de que dispone, mientras que el aparcerero o arrendatario, sabiendo que puede ser despedido al terminar su contrato, escatiman sus recursos para cuando llegue el momento.»

Estas son, señor presidente, las ideas conocidas de Avellaneda, que es el hombre público argentino que ha ido más lejos y más hondo en esta materia, y que las expuso luminosamente

y con gran amplitud en su conocido libro *Estudio sobre las leyes de tierras públicas*.

Yo no voy a cansar al Senado leyendo ni siquiera fragmentariamente esa obra, que todos los señores senadores conocen; me remitiré sólo a leer las palabras liminares, que, a guisa de bandera o emblema, encabezan sus mejores capítulos: «La propiedad territorial —dice— fácil y barata, debe ser la enseña de las leyes venideras, para vencer en su nombre y con su obra al desierto, cambiando el aspecto bárbaro de nuestras campañas.»

Más adelante, y acogiéndose a la autoridad del senador Benthon, que tanto hizo en Estados Unidos por el progreso de estas ideas, dice con él: «Somos una república y deseamos que nuestro país continúe bajo este bello y santo régimen. Multipliquemos, entonces, la clase de los propietarios libres.»

Y, por fin, dice luminosamente con Astour Joung: «Dad a un hombre la propiedad segura de una roca árida, y él la transformará en un jardín; dadle un jardín, y él lo convertirá en un erial.»

No puede decirse nada más elocuente para defender al régimen de la propiedad exclusiva y parcelada, en propiedad, a los agricultores, a plan de colonización, con preferencia a los sistemas de enfiteusis o de arrendamiento.

Nuestro despacho contiene concretamente esas soluciones, la de entregar la tierra seleccionada y parcelada en propiedad a los agricultores, a título de compraventa y en las condiciones que fija prolijamente y en todos sus detalles.

Vamos a ver con rapidez, que es muy difícil que aplicando lealmente esta ley, el colono pueda verse en algún caso en una situación tan ardua, que le obligue a apartarse de su contrato y dar motivo a la rescisión del mismo.

Desde luego, el despacho no exige del agricultor la posesión de determinado capital ni de determinados elementos de trabajo o de vida, como lo hacen otras leyes, que, pretendiendo ser más previsoras, se constituyen en el principal inconveniente para la aplicación de sus preceptos.

Así, por ejemplo, la ley de Méjico exige determinados elementos de trabajo. La ley de Buenos Aires, que he citado, también, lo mismo que el proyecto del ministro de Tomaso, de 1932, y el mismo proyecto de colonización oficial de Entre Ríos, suscripto en 1920 por el gobernador Marcó y el ministro doctor Eduardo Laurencena. Este despacho, no exige ningún capital ni elemento de trabajo determinado; solamente exige la selección de la tierra y la del agricultor.

Por el artículo 25, el colono debe pagar una cuota del 10 %, al contado. Luego voy a volver especialmente sobre esto.

Por el artículo 29, se establece que el saldo o amortización del 50 % se paga con una cuota de $\frac{1}{2}$ % anual acumulativo y $2\frac{1}{2}$ % de intereses; el 50 % restante se transfiere al Banco Hipotecario si éste acepta la proposición que al efecto debe hacer el consejo; si no aceptara, el consejo podrá optar entre otorgar la escritura de venta, reservándose hipoteca en garantía del saldo, o diferir la escrituración, hasta que sea pagado todo el precio.

Además del $\frac{1}{2}$ % que debe pagarse anualmente por concepto de saldo de precio de venta, como lo hizo notar en una interrupción el señor senador por Entre Ríos, debe pagar conforme al artículo 38, lo que se llama la cuota del «fondo de ahorro», que puede llegar hasta el 4 % anual.

De tal modo que la cuota total varía entre el $\frac{1}{2}$ % como mínimo y el $4\frac{1}{2}$ % como máximo, proporción que no puede ser más moderada ni entrañar mayores facilidades.

El artículo 39 dice: «Si los resultados de la explotación anual del predio no permitieran, a juicio del consejo, el cobro de esas sumas, podrá exonerarlas de su pago.»

En el artículo 42, segunda parte, dice: «El consejo, por unanimidad, podrá suspender transitoriamente el pago total o parcial de los servicios de amortización e intereses de la deuda contraída con los compradores de predios, así como la proveniente por precio de arrendamiento, teniendo en cuenta los antecedentes de cada caso y siempre que no haya saldo disponible en el «fondo de ahorro».

Es decir que, en determinadas situaciones, el Consejo Agrario Nacional puede suspender transitoriamente el pago de las cuotas anuales del precio del arrendamiento y de venta, y de la cuota de fondo de ahorro. Como el consejo fija esta cuota anualmente, está en condiciones de pulsar la situación y perspectiva de cada año y zona agrícola, ajustando a sus cálculos y pronósticos, el monto de la cuota que el agricultor debe oblar.

Finalmente, según el artículo 31, para aquellos agricultores que no puedan pagar el 10 % al contado, el despacho prevé que puedan contratar en arrendamiento la parcela por cinco años con opción de compra. Al cabo de ese término, optan por comprarla o apartarse definitivamente de la tierra.

Además, el artículo 67, autoriza préstamos

para instalación, vivienda y habitación que no excederán de \$ 6.000 moneda nacional.

El señor senador por Entre Ríos en el curso de su exposición, señaló lo que él creía contradictorio o confuso entre la existencia de una cuota del 10 % al contado y la autorización de un préstamo para instalación hasta la suma de \$ 6.000 moneda nacional.

Se preguntaba si ese préstamo podía aplicarse al pago de la mencionada cuota. No, señor senador. El despacho dice expresamente en el artículo 31, que cuando no se tenga para pagar la cuota del 10 %, el agricultor sólo puede optar a tomar la tierra a título de arrendamiento por el precio del 3 % anual del valor de venta.

Tanto en uno como en otro caso, el préstamo se aplicará a los gastos de instalación y vivienda que la ley establece.

Dije, señor presidente, que me iba a detener un instante en la exigencia de la cuota del 10 % al contado. Esta ley, que reposa sobre la base y el propósito de entregar la tierra dividida y seleccionada en propiedad al agricultor o colono, también elegido, quiere que cuando éstos celebren un contrato de compraventa realicen un acto serio y meditado. Quiere alejar la posibilidad de un arrepentimiento impune al día siguiente. Entonces le exige que cumpla un acto que entraña para ellos un esfuerzo y a veces, un sacrificio, como la mejor manera de garantizar la meditación y el propósito serio que el agricultor debe abrigar en ese momento decisivo.

Casi todas las leyes e iniciativas que se orientan en las soluciones de este tipo exigen el pago de una cuota al contado. En este caso, lo exigían, además del proyecto del Poder Ejecutivo, el proyecto del diputado Palacio y el del diputado Eyto; lo exigía el proyecto del diputado Lisandro de la Torre el año 1914, según el cual el precio se pagaba en veinte anualidades, de las cuales la primera era al contado. El proyecto del ministro de Tomaso, del año 1932, exigía determinados elementos de trabajo y el pago en dinero en un plazo máximo de diez años. La ley de Chile de 1928 exige el 10 % al contado. La ley de Méjico de 1936 exige determinados elementos de trabajo o créditos para adquirirlos, y tratándose de extranjeros, exige que se deposite en el banco oficial \$ 1.000 m/n. para responder a esas obligaciones. La ley de Buenos Aires, número 4.418, también exige el 10 % al contado.

Podrá discutirse si la cuota ha de ser el 10 %, o el 5 o el 15 %, pero lo indudable, dentro de las orientaciones y los propósitos de esta ley, es que

debe contener la exigencia de la primera cuota inicial.

El señor senador Palacios, cuyas sugerencias merecen siempre la mayor simpatía, y a quien he escuchado con todo interés, nos ha traído la que se refiere al pago del precio en productos de la tierra. Ese sistema, señor presidente, corresponde principalmente a la colonización privada, aquella que versa casi siempre sobre un campo o una colonia, que está precedida por contratos, en los cuales se fija claramente el destino de la tierra y la clase de cultivos a que se va a dedicar, de tal manera que el dueño de la misma puede anticipadamente estar preparado para recibir, en pago del precio, una determinada porción de la cosecha que ya conoce de antemano, disponiendo lo necesario para su comercialización.

Eso es el sistema de los colonos aparceros o parciarios. Ese sistema es el que propicia en su proyecto el señor senador por Entre Ríos.

Pero si eso se explica en la colonización privada, y en aquellos sistemas en que no se transfiere la propiedad al colono o al agricultor, es muy difícil aplicarlo a aquellos casos en que, como en los que propicia el despacho, sucede lo contrario. Se explica que cuando el dueño de las tierras continúa siéndolo y da ésta a cultivar en arrendamiento por un contrato de sociedad o aparcería, quede vinculado a la suerte o al destino de la tierra y reciba como precio de su ocupación, una parte de los frutos que ella rinde.

Pero es muy distinto el caso de una ley de colonización general o nacional que reposa sobre la base de entregar la tierra en propiedad y sin limitaciones, al colono.

La situación que se produciría, en caso de aceptarlo con carácter general y obligatorio, es fácil de comprender. Como no hay limitaciones en el uso de las tierras, como son de distinta naturaleza y de distintas ubicaciones geográficas, unos destinarían su parcela a cereales, otros las destinarían a forrajeras, otros a fruticultura, otros a horticultura, y los últimos, a cualquier clase de explotación granjera o mixta.

Entonces ocurriría, inevitablemente, que el Consejo Agrario Nacional se encontraría, al final de cada período, con una enorme masa de producción heterogénea y dispersa por todo el territorio del país, y que le exigiría un contralor para recibirla, transportarla y comercializarla, que representaría un servicio enormemente complicado y dispendioso.

A pesar de todo, la comisión, deseosa de no cerrar ninguna puerta al propósito de arraigar el hombre a la tierra y de ofrecer toda clase de

facilidades en ese sentido, va a aceptar la sujeción del señor senador por la Capital, en otra forma y con carácter simplemente autoritativo para el Consejo Agrario Nacional. De igual manera va a aceptar la supresión del artículo 66 relacionado con la tala o explotación de bosques, y, por fin, estudia en estos momentos la forma de aceptar igualmente la sugerencia relacionada con el pago del impuesto hereditario en tierras colonizables. Esta última iniciativa no tiene la amplitud que podría parecer a primera vista, porque el impuesto hereditario corresponde, según la ubicación de los bienes, a la Nación o a las provincias y porque reducido a las tierras situadas en jurisdicción nacional, ha de ser acaso limitado. Pero dentro de ese concepto y en la forma que la comisión lo propondrá en la consideración en particular, también anticipa, desde ya, su propósito de aceptarlo.

La comisión ha recogido con verdadera complacencia una sugerencia que le llevó antes de formular despacho, el senador por La Rioja, doctor González Iramain, en el sentido de permitir la colonización de tierras situadas a mayor distancia de las que el despacho fija como norma o regla general.

Ha introducido una modificación a la sanción de la Cámara de Diputados, que puede todavía redactarse, o ampliarse en otro sentido.

En esta forma, sin abandonar la idea directriz del proyecto de propender a la colonización de las tierras mejores de la República, se deja abierta la posibilidad para casos especiales, de la colonización en tierras más lejanas que pueden ser convenientes, aun a título de ensayo y de fomento. La comisión, en consecuencia, no ha abandonado, como se lo reprochaba amistosamente el señor senador por la Capital, la situación de las provincias que no pueden ofrecer tierras de la mejor calidad para colonizar, pero que esperan la acción del gobierno y del Congreso en el sentido de utilizar aquellas de que pueden disponer.

También ha de merecernos una consideración especial, en el curso de la discusión en particular, la doble sugerencia que nos ha hecho el señor senador por Córdoba, doctor Martínez, cuyo elocuente discurso he escuchado con todo interés, relacionada con los preceptos que se refieren a la expropiación y a los fondos de colonización. Sobre este último punto sólo he de permitirme decir al señor senador por Córdoba que eso no puede motivar una objeción fundamental a la ley.

El proyecto del Poder Ejecutivo proveía de fondos aun más exigüos, que sólo llegaban a

\$ 20.000.000 m/n. Esos fondos han sido aumentados en el despacho y en el curso de la discusión de la Cámara de Diputados a \$ 100.000.000 moneda nacional y pueden serlo en cualquier momento por la simple modificación de un artículo de la ley, y aun de una asignación del presupuesto, porque el despacho prevé que los \$ 70.000.000 m/n. deben entregarse por cuotas anuales. De manera, pues, que podrán aumentarse esos fondos en cualquier momento, de acuerdo al grado de realización de esta ley y la necesidad de adquirir mayores porciones de tierra.

La comisión, finalmente, ha estudiado algunas modificaciones en particular que le ha traído redactadas el señor senador por Salta, doctor Serrey y que aceptará en parte aunque no en la forma en que las ha proyectado el señor senador.

No creo, señor presidente, haber dejado sin respuesta ninguna de las objeciones fundamentales que ha merecido el despacho que tuve el honor de informar.

Y termino expresando al Senado que la Comisión de Agricultura, Industrias y Comercio reafirma, por mi intermedio, su convicción profunda de que la sanción de esta ley, si bien no ha de deparar al país la panacea para curar todos los males de nuestra tierra pública y para solucionar todos los problemas que la colonización futura le depare, habrá dado, en cambio, un gran paso en el sentido de estimular y facilitar, por ahora, la de las mejores y más fecundas tierras argentinas.

Nada más. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! en las bancas.*)

Sr. Presidente (Patrón Costas). — Correspondería votar en general el despacho de la comisión, pero habiendo quedado la Cámara sin quórum, queda levantada la sesión.

—Así se hace siendo la hora 20 y 15.

JUAN F. TORRADO.
Subdirector de Taquígrafos.